La República Democrática de los Pueblos

(Diez ejes del proyecto popular por los cambios)

Luis Espinoza Garrido

Centro de Estudios para la Democratización del Conocimiento (CEDECON)

PRESENTACIÓN

El texto que se expone en las siguientes páginas es un documento que refleja una opinión política y se origina en numerosos análisis desarrollados al interior del Centro de Estudios para la Democratización del Conocimiento, CEDECON, ampliados con fructíferos diálogos realizados con integrantes de otros institutos, dirigentes sociales y militantes de base, tras el propósito de aportar al proceso de discusión y elaboración teórica que se efectúa en la izquierda chilena, el que busca concordar un proyecto de sociedad alternativa, elemento crucial para continuar su camino de reconstrucción como opción política.

No es un estudio sociológico ni histórico, sino un conjunto de enunciaciones que pretende centrar el debate y que se plantea desde la óptica del allendismo, entendiendo a esta corriente como un conjunto de categorías ideológicas que fueron la base del proyecto representado en el programa de la Unidad Popular, las que provenían de una ascendente trayectoria iniciada a comienzos del siglo pasado, en la que se combinó lucha social con producción de nuevos conceptos, dando como resultado una estrategia bajo la cual se articuló un poderoso movimiento social y político que cambió la historia de Chile.

No obstante, la dureza de la derrota en 1973 generó un reflujo que se mantiene hasta hoy, el que trajo como consecuencia la muerte de miles de militantes y un alarmante desarme de la matriz de ideas, lo que se agudizó con el avance del liberalismo después de la desaparición del antiguo campo socialista de Europa Oriental y el retroceso que significó la emergencia de planteamientos derrotistas de quienes intentaron "renovar" el socialismo, pero terminaron como fervientes admiradores del capitalismo.

En tal contexto, también es necesario destacar que al interior del movimiento popular, al finalizar los años sesenta, germinaron otras corrientes que contribuyeron a enriquecer su volumen conceptual, tal como sucedió con el cristianismo popular, sector que manteniendo diferencias, se sumó a la propuesta de transformaciones que impulsó el gobierno encabezado por Salvador Allende. Conjuntamente, en la misma época surgieron otras tendencias revolucionarias con gran arraigo en los jóvenes, las que mantuvieron desacuerdos estratégicos con el allendismo y que a lo largo de su existencia han mostrado un gran espíritu de lucha. Asimismo, durante la resistencia a la dictadura, irrumpieron expresiones de lucha armada impulsadas por otros jóvenes que provenían del imaginario de la UP, quienes levantaron sólidas plataformas de ruptura democrática y cuya valiente acción pretende ser ignorada, así como en plena transición aparecieron nuevas reflexiones opuestas a manifestaciones del capitalismo no tratadas por una izquierda demasiado concentrada en la contradicción capital/trabajo, las que plantearon reivindicaciones ecológicas, de género, indígenas, de diversidad sexual y animalistas, entre otras.

Tal extenso conjunto doctrinario muestra la gran diversidad de las fuerzas que se oponen al capitalismo neoliberal, integrantes del amplio caudal democrático popular y que son parte fundamental de la discusión del proyecto de sociedad alternativa al modelo dominante, proceso que debe ser tomado con gran responsabilidad, porque será complejo puesto que a la vez, cada tendencia tiene internamente distintas visiones e, inclusive, asumen particulares estrategias indicando un dificultoso recorrido en el que se deberá privilegiar la unidad por encima de legítimas diferencias, al suscitarse un intercambio de opiniones que obliga a imponer creatividad, franqueza y estilos fraternos de resolución de discrepancias, debido a que es una oportunidad precisa para superar los difíciles, pero necesarios desafíos.

ÍNDICE

Presentación

PRIMERA PARTE: Los fundamentos teóricos e históricos

I. Teoría política, orden político y proyecto político

II. Los cuatro proyectos de la izquierda chilena en el siglo XX

- El proyecto de la Mancomunal
- La República Federal Socialista
- La República Democrática de Trabajadores
- La Vía Chilena al Socialismo
- Síntesis de los fundamentos teóricos de la izquierda chilena en el siglo XX

III. El Nuevo Orden Mundial

- La lucha de civilizaciones

IV. La crisis del orden político en Chile y la actual fase de la lucha de clases

SEGUNDA PARTE: Los ejes del proyecto alternativo

1. Vigencia de la revolución
2. La construcción del sujeto histórico por los cambios
3. Una nueva estrategia de poder
4. El contrapoder alternativo
5. El nuevo orden y el régimen político
6. La nueva economía
7. La transición a la nueva sociedad

- La República Democrática de los Pueblos

8. Inserción en el nuevo orden mundial

- Constitución de un bloque regional sudamericano
- Chile debe ingresar al BRICS

9. Las fuerza armadas

-La defensa nacional y las disputas en el nuevo orden mundial.

10. Los partidos y el frente político social

La República Democrática de los Pueblos
(Diez ejes del proyecto popular por los cambios)

La izquierda chilena se encuentra atomizada y sin un corpus de ideas que oriente sus actividades, lo que equivale a caminar a ciegas mientras la crisis obliga a definiciones. Carece de un proyecto de sociedad que encauce sus estrategias y articule tras un objetivo viable a su fuerza social y política desperdigada en iniciativas inconducentes, no estableciendo condiciones unitarias para vincular su masa crítica hoy esparcida, pero con alto nivel ideológico, compuesta por profesionales de las ciencias, humanidades y ciencias sociales, junto a diversos dirigentes y activistas sociales que batallan todos los días defendiendo los intereses populares. Ellos y ellas deben ser el cimiento de la producción teórica, que en el marco de una amplia movilización por los derechos del pueblo, tendría que germinar en el proyecto de sociedad alternativa del presente siglo y que guíe todas las acciones futuras, en una labor que debe ser entendida como estratégica en el marco del esfuerzo por reponer la idea de la revolución y el socialismo.

En tal sentido, el presente texto intenta ser un aporte y tras dicha perspectiva se propone generar una Iniciativa por el Proyecto, proceso que culmine en un encuentro ideológico de la izquierda, en el que se avance hacia la construcción de una matriz conceptual que, rescatando elementos históricos, actualice metodologías, categorías de análisis, estrategias, tácticas, programas y líneas políticas, acorde con el desarrollo alcanzado por la sociedad chilena y latinoamericana durante las últimas décadas.

En efecto, después de una clara expansión de las ideas socialistas, se presentó un periodo de retroceso provocado por la denominada “caída de la Unión Soviética”, fenómeno de alta repercusión sobre las fuerzas de izquierda, especialmente en los países desarrollados. No obstante, en Latinoamérica el impacto fue menor debido a que el salvajismo del modelo neoliberal no dejó espacio para fórmulas de salida circunscritas al capitalismo, emergiendo diferentes opciones de profundas transformaciones en la perspectiva de construir proyectos alternativos, todo ello, en medio de intensas e incesantes jornadas de lucha por parte de sus pueblos, lo que ubica a la región como un territorio en constante ebullición y uno de los lugares del mundo en el que, a raíz de la endémica desigualdad, se desarrollan vigorosas jornadas de reivindicaciones por los derechos de las persona y de construcción de propuestas que superen las estructuras de dominación de las burguesías locales, así como de la intervención desembozada de las corporaciones transnacionales y del imperialismo liderado por Estados Unidos y la Unión Europea.

Sin embargo, las facciones procapitalistas, conducidas por grandes empresarios, se recomponen una y otra vez y, ante tal situación, la izquierda latinoamericana tiene muchos retos y el principal de ellos se encuentra en el plano de las ideas, debiendo superar mitos y esquemas, como igualmente categorías eurocéntricas admitidas como dogmas. En lo correspondiente al movimiento popular chileno, este se encuentra justo en una fase inmejorable para iniciar una producción de conocimiento al calor de la crisis del orden social, pero tiene que cumplir ciertos prerrequisitos, siendo el más relevante la apertura de opiniones, razón que explica este documento político, cuyos contenidos se dividen en dos partes, la primera establece los tópicos teóricos e históricos que fundamentan lo planteado en la segunda unidad, sección en la que se desarrollan los diez ejes propuestos para la discusión del proyecto, que no son trazados definitivos, sino el obligatorio abordaje de la materia, destacando que lo expuesto resume un libro a publicarse pronto, en el que se profundizarán conceptos y categorías, cuyas partes más significativas se presentan a continuación.

PRIMERA PARTE: Los fundamentos teóricos e históricos

I. Teoría política, orden político y proyecto político

La sociedad chilena alcanzó un nivel de complejidad que la izquierda no sabe enfrentar, porque no produce el conocimiento con el que pueda construir su propuesta ideológica, por lo que toda la discusión política del país se desarrolla en torno al liberalismo. Eso quiere decir que su primer desafío es resolver su insuficiencia teórica. Ante ello, lo medular es entender que la teoría política es una rama de la ciencia política que se preocupa esencialmente del orden social y político y elabora contenidos relacionados a problemas que este enfrenta acudiendo entre otros aportes a la tradición histórica, aunque determinado por el tiempo específico en el que se desenvuelve, debido a que todos sus análisis los efectúa a partir de un desorden en el sistema político al que debe aportar soluciones, proceso en el que no puede ser neutral. En tal plano, el orden social es una categoría que debe entenderse como el equilibrio entre los intereses de las distintas clases y grupos sociales que se establece al interior de una sociedad, el que se constituye sobre la base de ideas hegemónicas determinadas por la fuerza de sus integrantes, por lo que es principalmente un orden político. Ambos no pueden disociarse y son una construcción artificial definida por los proyectos de sociedad que una clase social considera representativo de su interés particular. Asimismo, para constituirse en factor de estabilización, el orden político debe ser aceptado por la mayoría de la población, o sea, representar el interés general, lo que le confiere legitimidad, elemento crucial para su vigencia y, además, necesita de un entramado institucional que lo mantenga, defienda y reproduzca, lo que se logra a través del Estado como vital instrumento, junto a reglas establecidas como leyes, además de un régimen político, un aparato ideológico y fuerzas militares que posean el monopolio de las armas y que responden institucional e ideológicamente a quienes hegemonizan el orden.

Por ello, es imposible constituirse en alternativa política sin un proyecto político, comprendido como una propuesta de sociedad en el marco de un proceso de transformación de su realidad, lo que no puede confundirse con el programa, aunque este es parte relevante de su estructura. En tal sentido, proyecto y concepto de cambio se asocian y abarcan el conjunto de contenidos requeridos para su confección como se señaló anteriormente, desde las unidades programáticas y una propuesta de orden político hasta la definición de la contradicción principal, la estrategia de poder, las alianzas estratégicas y tácticas, junto a otros tópicos de importancia que constituyen un cuerpo articulado de proposiciones.

Igualmente, un proyecto político no es un objeto estático, se sistematiza condicionado por el devenir histórico, pero con una visión de futuro y generalmente se va construyendo a largo plazo, sin abarcar situaciones parciales y determinado por el carácter específico de una formación económico social, por lo que es irrepetible, convirtiéndose en la base de la materialidad de la lucha que emprenden las clases sociales, por ello, su carencia inhabilita a cualquier partido o alianza para constituirse en alternativa.

II. Los cuatro proyectos de la izquierda chilena en el siglo XX

A partir de sus orígenes en el norte del país a fines del siglo XIX, el movimiento popular chileno alcanzó un alto grado de madurez que, a poco andar, se condensó en una noción de proyecto alternativo que junto con establecer un diseño estratégico de poder, fundó lo que sería la izquierda chilena a lo largo del siglo pasado y que tuvo su máxima expresión en el gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. En

medio de una fructífera producción teórica originada en una praxis política constante y una intensa lucha social, elaboró cuatro proyectos de sociedad de acuerdo con la especificidad nacional que le dieron continuidad por décadas y constituyeron el fundamento de la Vía Chilena al Socialismo.

El proyecto de la Mancomunal

La primera construcción en Chile de un proyecto político desde los intereses del trabajo en disputa con el capital, fue la desarrollada por la Sociedad Combinación Mancomunal de Obreros de Iquique, formada por lancheros mayoritariamente analfabetos que no sabían de la existencia de Carlos Marx.
Aferrados a un diseño clasista que sustentó la larga y combativa huelga general de comienzos de 1902, entendieron con gran rapidez la necesidad de que los trabajadores accedieran al poder político y desde su organización social formaron en 1903 el Partido Obrero Mancomunado, en el que solo podían militar trabajadores, decidiendo participar en las elecciones en tiempos en que no había cédula única y solo se permitía votar a hombres que supieran leer y escribir. La persistente y muchas veces sangrienta lucha reivindicativa los obligó a plantearse la necesidad de construir el contrapoder fundando la Cámara del Trabajo, una agrupación de gremios, órgano del cual emanaban las directrices que debería implementar el partido, considerado solo una correa transmisora entre esta y la actividad en los órgano institucionales. Su proyecto político tenía al socialismo como propuesta de sociedad concibiendo la propiedad pública de los medios de producción y distribución como base de la nueva economía. Favorecía la participación de los gremios en el gobierno como en la elaboración de leyes que apuntaran al cambio estructural y era precisamente la Cámara del Trabajo, el ente desde el que emanaban las proposiciones, para lo cual sus miembros debían prepararse acorde con la relevancia de la misión. Fue así como sencillos trabajadores entendieron la importancia de la producción de conocimiento, cuestión que les permitió entender las particularidades del Estado chileno al que enfrentaron en heroicas jornadas, y que fue desarrollada sobre la base de una epistemología popular y clasista, que es el verdadero antecedente, en Chile, de lo que hoy se conoce como Epistemología del Sur. El eurocentrismo y un universalismo mal concebido que primó en las generaciones posteriores de la izquierda chilena, no permitieron entender en su real magnitud la experiencia de la Sociedad Mancomunal de Obreros, cuya influencia se extendió a todo el país con la fundación de organizaciones similares en sus principales ciudades y, sin duda alguna, constituyó la matriz ideológica y política estratégica del movimiento popular, de ahí la particularidad que revistió la llegada, en 1970, de un militante marxista al gobierno utilizando la vía electoral.
La singularidad radicó en una combinación entre institucionalidad y ruptura, ya que la participación en las elecciones se complementaba con la lucha social que tenía en la huelga general su principal diseño, en una época en que las paralizaciones de la producción eran prohibidas, consideradas ilícitas, y los sindicatos legalmente constituidos no existían, por lo que muchas veces dichos movimientos terminaron en masacres, pero no por eso fue desechada como forma principal de lucha reivindicativa, la que precisamente por la combativa resistencia obrera frente al Estado, se politizaba de inmediato.
De igual manera, la noción de contrapoder se manifestó por la necesidad de constituir la fuerza propia bajo una praxis de intensa lucha que obligaba a construir el poder obrero alternativo. Sin embargo, la Cámara del Trabajo no fue solo una opción clasista defensiva, sino una verdadera fuente de ideas que ejercía un poder de irradiación desde la base social hacia la institucionalidad burguesa.

La República Federal Socialista

Durante el año 1921, el tipógrafo Luis Recabarren Serrano publicó en Antofagasta el segundo proyecto político de la izquierda chilena, el que constituyó una continuidad con el planteado por la Mancomunal, debido a que el dirigente obrero había evolucionado políticamente renunciando al Partido Democrático y fundando en 1912, en Iquique, el clasista Partido Obrero Socialista, POS, entidad que adoptó como vía al poder una estrategia que combinaba voto, huelga general y boicot, vale decir, institucionalidad y ruptura. Postulaba la lucha no armada e, incluso, concibió la posibilidad de que sectores de la burguesía pudiesen adherir al cambio de sociedad, no obstante, si la clase dominante se oponía acudiendo a cualquier forma, entre ellas la fuerza, se declararía la huelga general haciendo ingobernable el país.

Igualándose a la Mancomunal, se consideró a una organización social, la Federación Obrera de Chile, Foch, como el principal órgano del poder popular, de ahí la denominación "federal" y, a su vez, en la perspectiva de construir un nuevo Estado, consideró a los municipios como el lugar desde los cuales se institucionalizaría dicho poder alternativo, ya que su base estaría en las asambleas industriales, instancia en las que participarían todos los habitantes activos a lo largo del país.

Desde los municipios se constituiría la Asamblea Nacional como escalón superior, la que nombraría un Comité de Administración Nacional que dirigiría el Estado y la nación. De igual manera, se asumieron explícitamente las limitaciones de la lucha reivindicativa para alcanzar el bienestar de los trabajadores y sus familias e insistiendo en la decisión política del cambio de sociedad, se estableció la instauración de una nueva economía, cuya base sería la socialización de los medios de producción, a través de su propiedad nacional, otorgándole primacía a los territorios, ya que era en las comunas en donde cada asamblea industrial decidiría autónomamente su modalidad.

El proyecto de los "federados" también establecía la designación de los integrantes de los tribunales de justicia por las asambleas industriales. Conjuntamente, con relación a la educación y la cultura, proponía que la enseñanza obligatoria fuese impartida hasta los 18 años de edad, quedando los municipios a cargo de la escolaridad primaria y la Asamblea Nacional de la secundaria, universitaria y normalista.

La República Democrática de Trabajadores

El tercer proyecto político de la izquierda fue el redactado por el profesor Eugenio González Rojas en 1947, el que a diferencia de los dos anteriores se preocupó de abordar la situación internacional en la que definió al imperialismo implantado por el capitalismo financiero y al comunismo soviético como dos fuerzas antagónicas a la independencia de los pueblos y precisó que el socialismo revolucionario era la tercera y correcta postura. Asimismo, sostuvo que el socialismo no formulaba principios abstractos ni de validez universal y reivindicó al marxismo como método fecundo de interpretación sociológica. A su vez, afirmó que en el capitalismo no habría solución a los problemas de la humanidad.

Con relación a la vía al poder, señaló no considerar al Estado como deidad y asumía que este tenía el propósito de defender a la clase dominante, planteando que su conquista era condición básica para la revolución socialista, ya que ninguna transformación podría realizarse si no se desplazaba del poder político a la minoría capitalista y este era asumido por la clase trabajadora. Declaró que el socialismo es revolucionario por el impulso histórico que representa, no dependiendo de los métodos que emplee para conseguir sus fines, siendo las condiciones objetivas y subjetivas las que definirían el carácter del

proceso de cambios. Asimismo, indicó que la subsistencia del capitalismo amenazaba la continuidad de la cultura, ya que este se afirmaba en la negación de la persona humana, sólo la acción revolucionaria de los trabajadores y de sus organizaciones de clase aseguraría el destino de la humanidad.
Como uno de sus grandes aportes, se manifestó en contra de la mutación del hombre como objeto de producción bajo la exigencia del utilitarismo capitalista, proponiendo recuperar el carácter integral del ser humano, en la plenitud de sus atributos morales y de sus capacidades creadoras. Todo ello bajo un régimen que asegurase a cada cual los medios para resolver los problemas de su propia existencia con el aporte del trabajo al bienestar común. Igualmente, aseveraba que solo a través de la abolición de los privilegios económicos sería posible la verdadera libertad en una democracia auténtica.
Un segundo gran aporte fue la concepción de la unidad latinoamericana, región que debía superar su expresión geográfica para transformarse en una realidad política y alcanzar una unidad económica orgánica continental, ya que ningún país estaba en condiciones de sustraerse a la conexión con los procesos que se desarrollaban en el continente. Persistía en que tal urgente y necesaria tarea solamente se materializaría por la voluntad de la clase trabajadora.

La Vía Chilena al Socialismo

Durante el año 1970 la Unidad Popular fue la demostración del más alto grado de madurez del movimiento popular chileno, cuyo proyecto precisó la vía al poder, una política de alianzas, el enemigo principal, una posición frente a la política internacional y un programa de gobierno. Fue la resultante de un proceso acumulativo de fuerzas y producción de conocimiento desarrollado por los trabajadores a lo largo de varias décadas y transformado en el principal fenómeno político del siglo XX.
Su planteamiento estratégico partía por establecer la relevancia de la crisis política y social por la que atravesaba Chile y frente a la cual se planteaba como opción el socialismo. El orden político iniciado en la década de los veinte se había agotado y no existía espacio para el reformismo o el desarrollismo. En tercer lugar planteó que si bien se transitaba por una vía institucional y electoral, se apuntaba a un drástico cambio en la relación de poder entre capital y trabajo, en el que la profundización democrática era fundamental. En cuarto orden, el desarrollo del contrapoder era una parte integrante de su programa y el germen de construcción de una institucionalidad alternativa y de un Estado popular en el que la Asamblea del Pueblo era un factor elemental. En quinto lugar, la nueva economía era considerada como un vehículo de instalación de nuevas relaciones de producción, pero también en términos contingentes, como fase ineludible de debilitamiento del poder económico de la clase dominante. Por ello, comenzó la aplicación de su programa interviniendo el sistema financiero, nacionalizando los recursos naturales y el comercio exterior, profundizando la reforma agraria, estatizando la industria monopólica y los grandes consorcios de distribución, entre otras medidas. Del mismo modo, el conocimiento y la cultura se transformaron en tareas estratégicas y, de igual forma, se inició un ciclo en las relaciones internacionales en que el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad entre las naciones primó por encima de los intereses de las corporaciones transnacionales y del imperialismo estadounidense.
En sus tres mensajes al Congreso Nacional, el presidente Salvador Allende fue señalando los avances, problemas y riesgos que arrojaba su gestión, ratificando su decisión inquebrantable por hacer cumplir el programa por el cual había sido elegido y que se empecinaba en cumplir.

Síntesis de los fundamentos teóricos de la izquierda chilena en el siglo XX

Establecer el fundamento histórico necesario para construir una alternativa de futuro es un requisito ineludible, por lo que es importante sintetizar los ejes teóricos sobre los cuales se desarrolló el pensamiento de la izquierda chilena en el siglo XX, los que aún tienen vigencia, aunque innegablemente deben adecuarse a una realidad compleja como la que hoy existe, sin embargo, tales ideas, junto al aporte proveniente de la praxis reciente, constituyen la matriz teórica para su reconstrucción.
Entre los principales conceptos destacaron los siguientes:
1. El capitalismo como sistema no resuelve los problemas del pueblo, es el origen de la desigualdad, la explotación de los hombres y mujeres, así como del saqueo de los recursos de las naciones. Tal situación ubica a la revolución social como única respuesta desde los intereses del trabajo y el pueblo en general.
2. La situación política y social del país se desarrolla al calor de una intensa lucha de clases en las que están representadas principalmente las fuerzas del capital y del trabajo. Las primeras sostienen el sistema capitalista y las segundas aspiran a un cambio en el que se imponga un modelo socialista.
3. Las fuerzas del capital mantienen el poder político del Estado y las fuerzas del trabajo se encuentran en condición de dominadas y deben aspirar a un cambio de fondo, en el que su representación política y social alcance el poder, condición básica para poder generar la transformación de la sociedad.
4. Las vías de acceso al poder se adoptan de acuerdo a las condiciones objetivas y subjetivas de cada formación social y, en el caso chileno, considera el complemento entre institucionalidad y ruptura. La primera se utiliza prioritariamente mientras que la segunda irrumpe cuando esta se agota.
5. La construcción de un nuevo orden social y político es el objetivo concreto de la lucha popular y se instaura a través de un programa de transformaciones que construye una nueva economía basada en la planificación y la socialización de los medios productivos, cuyos soportes son la propiedad estatal y la participación de los trabajadores en la dirección y gestión de las empresas. Al mismo tiempo, se desarrolla una estrategia destinada a cambiar la institucionalidad sobre la base de una nueva normativa constitucional que incorpora los elementos del nuevo orden.
6. El proceso de cambios mantiene como obligatoria condición la creación del poder popular, concebido como la estructuración política de los trabajadores y el pueblo en órganos constituidos como fuerza alterna a la construida por el modelo liberal capitalista y que se manifiestan como distinta opción de predominio al orden político existente y constituyente de la base del nuevo Estado.
7. La implementación del programa popular se desarrollaba en medio de la llamada guerra fría y en lo referente a la construcción de un nuevo orden internacional, destacando el fin del dominio imperialista, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el impulso de la integración latinoamericana.

III. El Nuevo Orden Mundial

El fin de la guerra fría dio paso a un orden unipolar en el que Estados Unidos se transformó en la potencia hegemónica sin contrapesos hasta la Crisis Subprime y la emergencia del BRICS. Al interior del capitalismo occidental, desde fines de la década de los años ochenta, la supremacía del capital financiero especulativo sobre la economía real dio paso a un proyecto denominado “gobernanza global de intereses compartidos”, en el que un bloque de grandes propietarios de fondos de inversión, empresas transnacionales, el complejo industrial militar, los oligopolios de los medios de comunicación y los

consorcios de las nuevas tecnologías informáticas, unidos a los detentores del poder estatal federal en Washington, se constituyeron en un gobierno en las sombras, que todavía maneja las relaciones del planeta a la usanza de un Imperio sin contrapeso alguno, aunque en franca declinación.
Su proyecto de dominación mundial tuvo como eje los bancos centrales de las cities y en el que Basilea cumplía un rol destacado. Este bloque, denominado globalismo, mantuvo un predominio sin contrapesos hasta que desde las economías emergentes surgieron voces discrepantes, así como al interior del propio Estados Unidos irrumpieron agrupaciones ultranacionalistas que rechazaron la deslocalización de las industrias en lugares, que por facilidades a la inversión extranjera y el bajo valor del trabajo, permitían mayores utilidades, pero dejaban al país norteamericano con alta cesantía y antiguos pueblos industriales en la miseria y el abandono. Su máxima expresión es la corriente que encabeza Donald Trump, quien lidera un grupo empresarial que se instaló en el Partido Republicano hegemonizándolo absolutamente. La clase dominante estadounidense se dividió irradiando las contradicciones al interior del Imperio.
Asimismo, frente al intercambio desigual y la necesidad de desarrollar políticas autónomas, una suma de países destinados a mantenerse en una eterna periferia, marcó distancia con las naciones industrializadas, cuyo representante más sólido es el bloque BRICS, una iniciativa propuesta por Rusia en el 2006 y que se concretó oficialmente en julio de 2009, la que se ha desarrollado en medio de un cambio geopolítico caracterizado por el declive de las potencias del Atlántico Norte, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, junto a la expansión de las economías del Asia. Además, la emergencia de un eje territorial en lo que se denomina Eurasia, hoy sostenido por la alianza sino-ruso-iraní.
De igual manera, emergieron potencias de tamaño medio, que rechazaron la dominación sin contrapesos del dólar, así como su inserción subordinada en los mercados y el difícil acceso al crédito, desarrollando estrategias propias y, aprovechando sus ventajas, se constituyeron en polos regionales geopolíticos que actúan autónomamente. Así, diferentes bloques y articulaciones comienzan a hacerse presente en el escenario internacional, constituyendo la base de un inevitable nuevo orden mundial de tipo multilateral.

La lucha de civilizaciones

A inicios de los años noventa, el fin de la Unión Soviética debilitó enormemente el sitial que mantenían las ideas marxistas dejando a la ideología liberal como la triunfante, cuestión que llevó a diversos teóricos de tal corriente a señalar la vigencia del pensamiento único, debido a que la realidad impondría al liberalismo como tendencia mundial sin contrapesos, no existiendo sistemas ni doctrinas alternativas al capitalismo, por lo que la historia llegaba a su fin. El universalismo liberal había avanzado de manera espectacular por largos siglos como sostén ideológico natural del proceso de acumulación de capital y, de esta forma, diversos pueblos fueron conquistados mediante la fuerza militar y sojuzgados bajo los valores de la civilización occidental cristiana y luego bajo nociones provenientes de la Ilustración, el newtonismo, Hegel y Smith, las que sostenían una modernidad basada en la racionalidad instrumental que justificaba la explotación indiscriminada de la naturaleza y la dominación de culturas consideradas salvajes, a las que había que llevar el progreso y una verdad asentada en la ciencia occidental.
No obstante, desde mediados de siglo pasado, junto a la declinación del colonialismo, las llamadas civilizaciones inferiores aumentaron su resistencia estableciendo sus propias concepciones, insertándose desde su especificidad en el orden mundial bipolar y luego unipolar, pero reivindicando su autonomía y

su propio patrón de desarrollo, además, cuestionando fuertemente al universalismo liberal, el que hoy se encuentra impugnado y en plena decadencia ante la contraofensiva de las "culturas primitivas".

Es un cambio de época, el paradigma central del dominio de Occidente se derrumba, frente a lo cual, la lógica aristotélica no sirve como base metodológica de análisis y conclusión. El bagaje ideológico eurocéntrico está profundamente objetado y tal cuestionamiento no se reduce solo al plano de las ideas, sino que principalmente a la dominación política y económica ejercida por el capitalismo, de la cual tanto el globalismo como el trumpismo son simples y diferentes formas de enfrentar su inevitable ocaso.

Ante dicha situación, las fórmulas capitalistas han concentrado su defensa en el proteccionismo y abandonaron los planteamientos del libre comercio, mientras que las discrepancias entre republicanos y demócratas se concentran en cómo defienden intereses corporativos internos estadounidenses, pero ambos desarrollan estrategias parecidas en contra de China y Rusia e incorporan a sus planes a la Unión Europea y otros aliados de menor envergadura. Hoy plantean el *homelands economics* un tipo de proteccionismo sustentado en subvenciones estatales a las empresas y restricciones al ingreso a sus mercados para productos extranjeros, principalmente chinos. Empero, es un despliegue selectivo, ya que siguen obligando a los países periféricos y dependientes como Chile y otros latinoamericanos, a mantener sus economías abiertas, condenándolos al extractivismo y conspirando en contra de regímenes con posturas independientes e interviniendo directamente en su desestabilización o derrocamiento.

Conjuntamente, la presión de Estados Unidos para alinear firmemente a Latinoamérica en su lucha en contra de sus enemigos, ha tenido en la intervención del Comando Sur uno de sus puntos altos, así, las visitas a la región de su jefa, la general Laura Richardson, son continuas y sin gran sutileza advierte que nadie puede establecer relaciones con el nuevo eje del mal, China, Rusia e Irán. De igual modo, establece convenios de entrega de armas, entrenamiento a oficiales del ejército y de la policía, ejercicios conjuntos en las zonas andinas donde se desarrollan conflictos sociales y "ayuda humanitaria" a las regiones desamparadas y, sin timideces, señala que a su país le interesa el litio, las tierras raras y el agua.

Por otra parte, la Unión Europea ha pagado caro su alineamiento subordinado a Estados Unidos, en especial Alemania, que según el FMI crecería en el 2024 solo un 0,2%, mientras que la India aumentará su PIB en un 7,0%, China en un 5,0%, Rusia un 3,2%, Estados Unidos 2,6%, España 2,4%, México 2,2%, Brasil 2,1% y Japón 0,7%. O sea, las economías que más crecerán serán las pertenecientes al BRICS, en una media mundial del 3,2%. Es evidente que la guerra en Ucrania ha impactado en mayor grado a la que era, hasta hace poco tiempo, la "locomotora europea".

Además, en diciembre del 2023 el Parlamento Europeo promulgó la Ley de Materias Primas Críticas, Critical Raw Materials Act, CRMA, decretando que el año 2030 debería extraer de su propio territorio el 10 % de las que consume al año, procesar el 40 % de esa demanda y reciclar el 25 %. Una normativa que busca reducir la dependencia de China en abastecimientos de minerales estratégicos, país del cual importa un 98% de tierras raras y 93% de magnesio, entre otros minerales clave que les provee.

Igualmente, previendo los problemas en el suministro de litio, la Unión Europea reorientó el Programa Global Gateway creado en el 2021, buscando ganar presencia como socio en los países en desarrollo, complementándolo con la CRMA y adquiriendo este un carácter marcadamente extractivista, ya que si bien priorizaba la energía, también atendía áreas como la salud y el medioambiente.

Sin ninguna duda, una confrontación entre las economías que constituyen el G7 en contra de los BRICS, en especial China, escenario en el cual Chile está involucrado como abastecedor de cobre y litio.
En dicho contexto, el nuevo orden mundial en construcción influye de manera creciente en el país y es un factor que aumentará su presencia y frente a ello, cualquier proyecto político que se pretenda elaborar debería considerarlo con atención. La nueva realidad indica la emergencia de las civilizaciones, pero en un escenario muy distinto a la tesis racista de Huntington, sino como reivindicación anticolonial.
Un desafío para la izquierda chilena que durante el siglo pasado insertó su postura internacional en el marco de la guerra fría, una confrontación desarrollada al interior del eurocentrismo, mientras que hoy el escenario ha cambiado totalmente y obliga a reorientar la lucha antisistémica.
En el contexto de la formación de un nuevo orden multipolar, hay que estar en condiciones de abordar la complejidad de las dinámicas internacionales actuales superando visiones binarias y comprendiendo la diversidad que se manifiesta a través de múltiples civilizaciones, con sus respectivas alternativas culturales, filosóficas, sociales, políticas y espirituales. América Latina debiera ser el espacio de interés común en el cual nos reconozcamos y ejerzamos nuestro derecho a formar una alianza independiente, que supere el tutelaje ideológico eurocéntrico y el vasallaje político del Departamento de Estado.

IV. La crisis del orden político en Chile y la actual fase de la lucha de clases

La actual situación política en el país se enmarca en la crisis del orden político de la llamada transición, su agotamiento terminó con la "democracia de los acuerdos" y hoy ninguna organización política ha logrado proponer una solución, aunque los llamados a los consensos se manifiestan a diario en el plano de los lamentos sin encontrar una salida. El problema principal es el fracaso del modelo económico y del régimen democrático protegido consensuados en julio de 1989 y que duró, a medias, como un orden legítimo hasta octubre del 2019. Frente a tal escenario, tanto la derecha como las fuerzas del gobierno intentan reflotar un pacto, pero no tienen proyecto viable, ya que proponen continuar con el orden que fracasó y, aunque la movilización social disminuyó debido a que las fuerzas políticas, supuestamente de izquierda y hoy en el poder, propician la contención de los conflictos o reprimen a quienes consideran peligrosos, a la larga se transforma en un autoengaño, ya que no significa que la crisis haya sido resuelta. Son contradictorias, por decir lo menos, las declaraciones de los personeros de La Moneda jactándose de haber "tranquilizado al país", sin reconocer que tal acción solo favorece los intereses de los grupos empresariales, mientras el pueblo sigue padeciendo las secuelas del modelo sin avizorar ningún cambio y debiendo esperar las migajas que se le otorga mediante míseros subsidios.
Todo ello se debe a que el bloque en el poder en Chile, que domina el capital financiero, desconoce que hubo un problema estructural durante la transición, originado por una coalición liberal compuesta por la derecha, la Concertación, los militares y los grupos económicos, que promovió un nuevo orden que si bien tuvo legitimidad y acuerdos sancionados en un plebiscito con alta asistencia y aprobación, benefició a una minoría mientras el resto debía esperar una bonanza que no llegó, por tanto, el empresariado y la elite concertacionista fueron los favorecidos. La Concertación asumió el diseño pinochetista y cometió errores que perjudicaron ampliamente a las clases populares, entre los que destacan:
1. Elaboración de un diagnostico inexacto de la nueva estructura del bloque en el poder durante la Dictadura, en el que se constituyó una nueva derecha compuesta por el alto mando del ejército y la

armada, el grupo gremialista de Jaime Guzmán y los economistas conocidos como Chicago Boys. Así, la antigua Code, que lideró la movilización en contra de la UP y creó las condiciones para el golpe, quedó fuera del grupo que manejó el poder durante el orden autoritario, por tanto siempre fue marginal.

2. Lo anterior se debió a que la Concertación no entendió que el capital financiero se constituyó en la facción hegemónica al interior de la clase dominante desplazando al capital industrial, agrícola y comercial, disminuidos por la aplicación del programa económico del gobierno del presidente Allende.

3. La adhesión al liberalismo por parte de la DC y el socialismo renovado, significó un diseño de negociación que idealizó la democracia representativa liberal que en 1970 ya estaba en crisis, por tanto, era inviable, imponiéndose el modelo democrático protegido que rige hasta hoy.

4. La estrategia de ruptura pactada, copia de la transición española, fue una quimera, ya que la diferencia con tal proceso fue la muerte de Franco, el real acontecimiento rupturista que en Chile no sucedió. Tal diseño solo hubiese sido viable si la operación del FPMR en el Cajón del Maipo hubiera tenido éxito.

5. Al adoptar el liberalismo como base ideológica, la Concertación separó lo político de lo económico, por lo que todo el acuerdo de julio de 1989 se concentró en lo procedimental, evitando asumir el conflicto social que mantenía grandes proporciones debido a lo implacablemente abusiva que resultaba la aplicación del modelo neoliberal en las capas de menores recursos.

6. La postergación del conflicto social bajo el argumento de la regresión autoritaria y la defensa de la gobernabilidad, hizo que la Concertación cooptara al movimiento social, lo que permitió al empresariado aumentar sus utilidades, mientras al pueblo chorrearon recursos en magros subsidios. Ello desprestigió a los actores sociales cooptados e incentivó la formación de otros nuevos al margen del orden y muchos que funcionaban en su interior desconocieron sus liderazgos nacionales y reorientaron políticamente sus plataformas y estructuras. Dicho movimiento social alternativo fue la base de la revuelta del 2019.

7. El cuestionamiento a la supuesta intervención de la sociedad civil por parte del Estado planteado por el socialismo renovado, debilitó al aparato público como protector de los sectores vulnerables y el argumento que concebía a la sociedad civil como órgano de regulación del Estado fue un desatino ideológico, ya que esta nunca fue premunida de dispositivos para controlar el aparato estatal y, por el contrario, fue intervenida por este a su antojo. Así, resultó una sociedad civil disminuida y atomizada, junto a un Estado débil y utilizado preferencialmente por los empresarios e irrumpiendo la corrupción.

8. Tanto la DC como el socialismo renovado desterraron el concepto revolución de su imaginario, pero no propusieron un proyecto alternativo, primando el modelo de la Dictadura, el que se impuso durante la transición sin representar el interés general. Así, la gente dejó de participar en las elecciones debilitando la democracia tutelada y, desde su lucha cotidiana por sobrevivir, resintió el privilegio de la elite empresarial y política que dominó todas las actividades del país durante 30 años, hasta que explotó.

9. La hipotética construcción de un sujeto democrático, al margen de la lucha de clases, el que actuaría de manera neutral en el marco del liberalismo nunca existió, lo que coadyuvó a imponer el sujeto consumista creado por la Dictadura. La Concertación estimuló un sujeto clientelista con prebendas del Estado conseguidas de manera non santa. El verdadero sujeto de la transición fue el empresariado.

10. El hecho de que la híbrida transición durase tanto tiempo, no quedando aún en claro cuándo terminó, obligó a extender por un largo periodo la centralización de decisiones, imperando el inmovilismo, dando

cuenta de una situación sumamente estática, cuestión que conspiró en contra de mantener una dinámica transformadora, factor esencial en una transición y en todo régimen democrático.

11. Lo anterior se agravó ante la constatación de que la promesa de cambio de la Concertación nunca se concretó, por el contrario, los grupos económicos progresaron y las redistribución de la riqueza fue mínima. La sensación fue de un profundo engaño y, más allá de lo material, la decepción provino por la estafa política, una cuestión que afectó principalmente a la dignidad de las personas.

Ante ello, hoy es necesario responder al desafío de la coyuntura caracterizada por la inestabilidad que provocan los cambios estratégicos en la correlación fuerzas tanto a escala mundial como en el país.

¿Cuál son los elementos principales de la actual situación política nacional?

En definitiva, lo principal radica en que el orden posdictatorial se agotó definitivamente y la actual fase del periodo plantea la necesidad de construir uno nuevo, proceso complicado, ya que aún predominan fuerzas sociales y políticas que desean mantener el antiguo, sumado a la incapacidad de los partidos que entendiendo la necesidad de construir uno distinto, carecen de proyecto político, el factor que articula la disposición de las clases sociales a participar en un pacto. Y sin pacto, no pueden producir un orden.

En cuanto a la disposición de fuerzas, el empresariado y la derecha se encuentran en un delicado momento debido a que su propuesta solo es más de lo mismo, postulando un neoliberalismo 2.0, en un mundo que camina en otra dirección. Desde la época del "ladrillo" la derecha chilena no tiene proyecto viable y se divide cada vez más, precisamente, entre quienes añoran la política de los consensos con hegemonía neoliberal y los nostálgicos del pinochetismo que confluyen con las políticas del trumpismo, aunque son diferentes. Ambos sectores se niegan a reconocer la crisis política y creen que el problema se encuentra en la permisividad con grupos disfuncionales al sistema, ya sean mapuche, sindicalistas, feministas o ambientalistas, a quienes intentan asociar con la delincuencia y el crimen organizado.

Plantean que la revuelta social fue ocasionada por desadaptados y que el país debe regresar a la normalidad y a los consensos para que sus inversiones se efectúen con una garantía de seguridad.

Tienen la certeza de que volverán al gobierno en el 2026 y consignan esta fase del periodo como de avance en dicha perspectiva, imponiendo acuerdos que servirían para su futura administración, siendo uno de ellos, reformar el sistema político buscando la reducción del número de partidos y, ojalá, volver al binominalismo. El otro es resolver supuestos retrasos en la inversión provocados por la permisología, intentando eludir los controles ambientales o la participación de la comunidad en la aprobación de proyectos que podrían perjudicarla. No obstante, el mayor inconveniente radica en su incapacidad para construir una nueva propuesta de capitalismo que supere el patrón neoliberal y que represente el interés general. Del mismo modo, un tercer gran problema a resolver para la derecha es terminar con el calificado "conflicto mapuche", una urgente demanda levantada por los grupos agroindustriales de la denominada Macrozona sur del país, los que solo proponen represión y una desacertada "chilenización" como fórmula de integración forzosa, sin la mínima intención de devolverles las tierras a los indígenas.

Por lo demás, la situación internacional es un factor que complica a los empresarios y a la derecha, ante la intransigencia de Estados Unidos para expulsar a China de Sudamérica, lo que perjudica las exitosas exportaciones a la nación asiática, así como a los industriales que importan insumos como el acero. Ideológicamente, son cercanos a Washington, pero no desean perder los negocios con Beijing.

Por su parte, las fuerzas del gobierno también se encuentran divididas sin un proyecto político común, estructurándose en diversos polos partidarios con bloques constituidos sobre políticas puntuales.

El PS y el PPD actúan en conjunto y no tienen elementos nuevos que aportar que no sea insistir en las políticas de la ex Concertación y su mayor iniciativa ha sido una de índole interno, una eventual fusión en una fuerza socialdemócrata, pero no demuestran gran avance en dicha dirección, aunque elaboraron un documento común denominado "Manifiesto del Socialismo Democrático", que articula su opinión estratégica definiéndose por la regulación del capitalismo, pero no es un proyecto político alternativo.

En tal perspectiva, la coalición Frente Amplio se fusionó como partido y en su declaración de principios no hace mención a la crisis del capitalismo, definiéndose también como una fuerza socialdemócrata, aunque de nuevo tipo, la que busca redistribuir el poder mediante la ampliación de derechos y libertades.

Por su parte, el Partido Comunista atraviesa fuertes contradicciones internas en la que se distinguen distintas tendencias que comienzan a estructurarse en dos, una de ellas la constituyen los grupos más jóvenes, claramente de corte socialdemócrata y cercanos a las posturas del Frente Amplio, mientras que la otra corriente, de sello más izquierdista y tradicional, intenta hacer coincidir su participación en el gobierno con las aspiraciones populares insatisfechas, jugando a dos bandas.

El problema de las fuerzas gobiernistas es su incapacidad para plantear un proyecto de salida a la crisis y su vaga propuesta de erigir un Estado social de derechos se estrella con la realidad, ya que este es inviable si no se generan cambios estructurales, objetivo para el cual no tienen fuerza ni decisión política que permitan implementarlo, al menos en el actual periodo político, por ello solo pueden aspirar a administrar el moribundo modelo y el agotado orden político.

En concreto, una situación política marcada por la incapacidad de las distintas clases y fracciones de clase para producir un nuevo orden político, cuestión que provoca una crisis de mediana intensidad, con un movimiento social en reflujo y un sistema político sin propuestas de resolución, generadas por la incapacidad para elaborar un proyecto de sociedad que supere el agotado neoliberalismo.

SEGUNDA PARTE: Los diez ejes del proyecto alternativo

El proyecto político de la izquierda surgirá de un análisis que abarque la nueva realidad de la sociedad chilena y una acertada visión del orden mundial emergente. Sin embargo, mantiene una matriz histórica construida en más de un siglo y que determina cualquier elaboración estratégica, de ahí la importancia de destacarla y, si bien hoy el escenario es complejo aflorando nuevas contradicciones y distintos actores sociales, se manifiesta una especificidad histórica imposible de ignorar, la que le confiere la impronta revolucionaria al movimiento popular. Por ello, los puntos desarrollados a continuación son necesarios de analizar por constituir la base de la elaboración de un futuro proyecto político.

1. Vigencia de la revolución y el socialismo

Si se parte de la premisa de la existencia en Chile de una crisis estructural del modelo neoliberal y del agotamiento del orden político, es evidente la necesidad de un cambio profundo que inobjetablemente responderá a los intereses de cada una de las clases sociales, lo que desde la perspectiva del trabajo significa la vigencia de la revolución y del socialismo, propuesta que también es respuesta para quienes se ven afectados por la dominación patriarcal y necolonial, así como por la discriminación, exclusión y el maltrato, por parte de un inhumano sistema que utiliza el capital para acumular más capital, explotando a los trabajadores y mercantilizando los procesos de intercambio, producción, distribución e inversión. No obstante, fuerzas socialdemócratas y ciertas corrientes liberales y socialcristianas plantean que la crisis podría sortearse con un tipo de capitalismo más regulado. Algo totalmente inviable.

Pero, la vigencia de la revolución no significa que exista una situación revolucionaria, o sea, no se está ad portas de un cambio estructural, ya que ni siquiera en octubre de 2019 se alcanzó dicho estadio, si bien hubo una situación prerrevolucionaria, siendo una de sus falencias la ausencia de una fuerza política con un proyecto de cambio de sociedad, ya que las movilizaciones no traspasaron las protestas.

Igualmente, el proceso de cambios se desarrollará acorde al carácter de la formación social chilena, es irrepetible ni será copia de revoluciones realizadas en otros continentes y en épocas históricas distintas. En tal sentido, Chile se destaca por ser un país capitalista dependiente, periférico, extractivista y con la peor y asimétrica distribución del ingreso de Latinoamérica y del mundo, y con el capital financiero, aliado a los grandes grupos económicos, como el sujeto hegemónico de la sociedad.

Según la Comisión del Mercado Financiero, CMF, a diciembre del 2023, esta fiscalizaba a más del 77% de los activos financieros del país con un total de 642 mil millones de dólares, de los cuales, el 56% son gestionados por bancos, el 23% por fondos de pensiones, el 10% por aseguradoras, el 7% fondos mutuos, el 3% fondos de inversión y el 1% cooperativas financieras. Asimismo, existen más de 7 mil entidades que funcionan en el sistema y, de ellas, 17 son bancos, 3.425 entidades ligadas al mercado de valores y 4.075 pertenecientes al mercado de seguros. Además, hay un total de 8.393 agentes de ventas de seguros. El monto del capital financiero fiscalizado equivale a tres veces el PIB nacional.

Por otro lado, la formación económico social chilena tiene en el Estado el instrumento de mayor cohesión, mantención y reproducción del orden social en su expresión política, económica e ideológica, así como del ejercicio del poder político, aunque este lo desborda y se manifiesta más allá de sus aparatos. Lo central de un Estado capitalista es la jurisdicción territorial, además, controla el movimiento de bienes, capitales y fuerza de trabajo y participa en la división internacional del trabajo. Igualmente,

determina las normas que rigen las relaciones sociales de producción, concentra la carga impositiva transformada en su ingreso principal regular y mantiene el monopolio de la fuerza armada. De esta forma, se transforma en espacio central de la disputa por el rumbo que direcciona a una sociedad.

Por ello, la fase primaria de la revolución chilena es la lucha por el control del Estado y el análisis de sus particularidades es fundamental, debido a que el capital financiero y sus aliados, definido como el enemigo principal, tiene en dicho aparato el principal instrumento mediante el cual se constituyen las relaciones de dominación, en un proceso en el que, el interés de la clase dominante se presenta como el interés general, lo que obliga a incorporar a la sociedad civil a dicho consenso para darle estabilidad, permitiéndole al Estado adquirir un nivel de autonomía relativa al tener que, obligatoriamente, expresar en su interior las contradicciones de esta, en el marco de la dominación de clase que se expresa en el conjunto de la sociedad. Ante ello, las clases subalternas pueden influir en las contradicciones que se expresan al interior del Estado, ya sea externamente por las luchas populares politizadas o por presión interna a través de sus representantes en sus distintas instancias o las discrepancias en sus aparatos, lo que adquiere relevancia en una crisis social o política, alcanzando logros que el bloque en el poder no desea ceder, como fue el caso de la conquista del voto universal, sin embargo, por su carácter, no significa que la hegemonía pueda variar, ello solo puede suceder a través de un cambio estructural.

Conjuntamente, el aparato estatal utiliza su autonomía relativa para ordenar las relaciones de clase de acuerdo a la ideología dominante, tanto en el bloque en el poder como en las clases dominadas, por tanto interviene al interior de la sociedad civil y si existiese peligro de quiebre del orden puede hacerlo de manera coactiva, restableciéndolo, ya sea desterrando la conflictividad social, cooptando a los grupos que mantienen resistencia o también desarrollando prácticas en las que predomina la corrupción.

En Chile todavía impera el Estado reconstruido durante la Dictadura, sin embargo, desde la revuelta popular dejó de constituirse en condensador material de los intereses de las distintas clases y fracciones de clases, manteniendo diferencias que aún no permiten reconstruir el orden social, además, conflictos continuos no resueltos entre los que destaca el del Wallmapu, se suman a la regular gestión de sus aparatos. Sin embargo, la acción de las masas en las calles en octubre de 2019, demostró que tanto desde el exterior como estructuralmente en su interior, se pueden generar situaciones de ruptura institucional, siendo una de ellas la obligada convocatoria a dos eventos constituyentes, otra fue la acción autónoma que mantuvieron los municipios, una tercera los retiros de los fondos previsionales y, una cuarta, la ayuda durante la pandemia. Todas fueron iniciativas generadas desde la institucionalidad y que Piñera no deseaba, pero debió aceptar, demostrando una posición de autonomía de algunas instituciones que no se alinearon en forma muy decidida, en términos políticos, con el gobierno de derecha, debido a la presión popular, como fue el caso de varios municipios, el Tribunal Constitucional, la Contraloría y la comandancia de la división militar de Santiago, entre otras.

Un segundo aspecto a considerar a la hora de definir elementos estratégicos de la revolución en Chile, es la producción del nuevo orden social, el que desde el fin del orden oligárquico heredado de la colonia no se ha podido construir al margen de la clase trabajadora, ya sea por presencia en lo que se conoció como la “cuestión social” a fines del siglo XIX, o por ausencia, en el caso del fracasado orden posdictatorial repudiado en el 2019 por millones de personas en las calles.

Actualmente, en el país, el capital financiero y los grandes grupos económicos acuden a la ideología liberal y a la defensa de la propiedad privada como los dos ejes de un conglomerado en el que han incorporado a la totalidad de los productores chilenos, ya sean grandes, medianos o pequeños, los que apoyan sin discrepancias sus ideas y estrategias políticas, aun cuando mayormente sus intereses se contradicen, pero son incapaces de actuar con autonomía. Es el Bloque de los Propietarios, el que se cohesiona por afinidad ideológica y cultural. A ellos se suma la gran cantidad de transnacionales que participan gremial y políticamente en Chile y solidarizan o forman parte de dicha agrupación.

La clase trabajadora y los movimientos sociales deben producir su propio orden social sobre la base de su proyecto de sociedad, para lo cual necesitan establecer una alianza con la mayoría de los integrantes del Bloque de los Propietarios cuyos intereses son contradictorios con el capital financiero especulativo y los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, cuestión que debe concretarse en un acuerdo que sea la base del nuevo orden y que represente el interés general.

¿Cómo se manifiesta la revolución en estos dos aspectos principales, vale decir la lucha por el control del Estado y la producción del nuevo orden social?

En primer lugar, es un tema de definición de estrategias que involucra objetivos, diseño, constitución de fuerza alternativa, escenarios y tiempos políticos, todo ello condicionado al cambio de la correlación de fuerzas entre el bloque en el poder y las clases subalternas de la sociedad chilena, estas últimas organizadas en forma tradicional histórica o en los nuevos movimientos sociales.

En segundo orden, las definiciones abarcan la especificación del sujeto histórico, una nueva teoría del poder, la construcción del contrapoder, el nuevo orden y el régimen político, la nueva economía, la transición, la inserción en el nuevo orden mundial, la construcción del frente político y la política a desarrollar para las fuerzas armadas.

Tercero, el escenario de la confrontación política se despliega sobre la base de la institucionalidad y de la ruptura, en el marco de una profunda democratización de la sociedad.

Por último, el proceso de cambios no se inicia una vez resuelto el "asalto al Palacio de Invierno", sino en los momentos en que comienza la construcción del contrapoder social y la lucha por el control del Estado, en la perspectiva de lograr la toma del poder concebido como un conjunto de relaciones en las que deberán primar los intereses de la clase trabajadora, los movimientos sociales y la capas medias.

2. La construcción del sujeto histórico por los cambios

El sujeto histórico revolucionario es un actor social y político que lucha por una transformación del sistema de dominación y emprende su labor a través de un proceso situado en un momento específico del desarrollo de una sociedad, por tanto, se ubica históricamente y su decisión por cambiarla tiende a efectuarla pensando en cómo construir una nueva realidad que modifique la presente, iniciativa que se fundamenta en un conjunto de ideas que provienen de una praxis concreta.

Todos aquellos actores sociales que estén por transformar el sistema estructuralmente, forman parte del sujeto histórico revolucionario y ello se corresponde con las actividades que realiza al interior de la sociedad. En tal aspecto, los seres humanos abordan como principal quehacer el producir bienes para satisfacer sus necesidades y alcanzar la felicidad y bajo un sistema capitalista, el modo de producción de

dichos bienes tiene al trabajo y al capital como sus principales elementos constitutivos siendo sus agentes los trabajadores y los empresarios respectivamente.

En la medida que los trabajadores luchan por cambiar las relaciones que determinan el modo de producir y aspiran a construir uno propio en el que primen sus intereses, evolucionan desde un grupo de productores a un sujeto revolucionario, ya que tal carácter no solo es adquirido por una condición de tipo estructural, sino que también por el grado de conciencia que alcancen para terminar colectivamente con su condición de objeto de producción cuya fuerza es transformada en mercancía y, además, hoy convertido en objeto de consumo y endeudamiento, cuestión que constituye una doble objetivación.

No obstante, el alto nivel de contradicciones del capitalismo chileno ha generado otros sujetos que hoy se ven perjudicados por sus efectos, quienes también deberían ser considerados revolucionarios, ya que el proceso de expansión capitalista se desarrolló sustentado en el universalismo liberal que basó en el racismo, el sexismo y la depredación de la flora y fauna de la naturaleza, formas fundamentales de la acumulación de capital, situación que junto a la explotación de los trabajadores provocó la esclavitud, el colonialismo, el patriarcado, el desastre ecológico, la exclusión de las minorías, el maltrato animal, la obligatoriedad de lenguas y cultos europeos, así como otras imposiciones culturales destinadas a desarrollar una asimilación congruente con la conquista de los territorios.

En dicho contexto, la clase trabajadora no es el único sujeto revolucionario, además, los cambios en la organización de la producción y la nueva estructura del trabajo, originaron la flexibilidad laboral, la tercerización, diversas formas de empleos como el parcial, temporario, cuentapropista, online y otros, siendo la robotización y la inteligencia artificial, factores que ya están presentes. En Chile, todo ello bajo la incertidumbre que provoca el Artículo 161 del Código del Trabajo que permite los despidos por necesidad de la empresa. De esta manera, la relación salarial se diferenció aumentando la estratificación entre quienes ganan grandes sueldos como los trabajadores de la minería y aquellos que reciben el ingreso mínimo ciertos meses del año. Además, la ventaja que entrega la asociatividad entre integrantes de una misma clase, se diluye con la debilidad de los sindicatos e impera la individualización ante la ausencia del colectivo que protege. La fragmentación de los trabajadores es impedimento para la resistencia al poder empresarial e inclina la balanza a favor del capital y no existe un contrapoder para enfrentar el nuevo escenario. De esta forma, el trabajo disminuyó la capacidad de su representación social como bloque unitario y, con mayor razón, no tiene posibilidad de levantar una propuesta alternativa de sociedad. Ello significa que los trabajadores presentan dificultades en reasumir su papel como principal sujeto del cambio social y político en un proyecto de transformaciones de largo alcance.

Ante ello, el sujeto por los cambios deberá ser plural, abarcando la totalidad de las contradicciones, sin embargo, un factor relevante en su composición es la centralidad, que no es lo mismo que hegemonía, la que se establece a partir de la praxis histórica, en la que, a diferencia de Europa y otros países de Latinoamérica, los trabajadores chilenos tienen una trayectoria única que les confiere dicha calidad, no en vano, fue el movimiento obrero el que fundó la izquierda en el país a comienzos de siglo XX y generó un proceso único en el mundo entre 1970 y 1973. Además, durante la dictadura los sindicatos del cobre fueron los gestores de las masivas protestas en mayo de 1983, las que se constituyeron en el comienzo del fin de la Dictadura y en la revuelta social del 2019 la mayoría de quienes fallecieron por la

represión eran trabajadores, aunque una gran mayoría de ellos participaba en términos individuales o en pequeños colectivos, además, muchos y muchas laborando en empleos precarios.

En tal sentido, a pesar de la centralidad de la clase trabajadora en el marco de un sujeto plural por los cambios, es necesario destacar el tratamiento a dos elementos fundamentales en su construcción. Uno de ellos es el movimiento mapuche y el otro lo constituyen las capas medias. Con relación al primero, es evidente el error de tipo conceptual, eurocéntrico, cometido por la izquierda chilena al considerarlo en la estructura de clases de la formación social nacional, sin tomar en cuenta su especificidad como pueblo nación. Planteando el problema desde una visión autocrítica, es evidente el carácter neocolonial del método, disfrazado de paternalismo y utilitarismo, acentuado por opciones revolucionarias desfasadas, aunque durante el gobierno del presidente Allende se avanzó en lo que fue la restitución de tierras y se intentó un nuevo trato. Sin embargo, lo central estuvo en no denotar la diferenciación nacional, buscando una asimilación a la lucha de clases que no tenía fundamento, deformación que fue corregida por una sola orgánica de izquierda durante la resistencia a la Dictadura, pero principalmente, por las nuevas generaciones de mapuche que desde mediados de los años 80, comenzaron a desarrollar un proyecto autonómico que tiene en el autogobierno y la lucha por la tierra, su principal reivindicación, factor que en la situación política nacional influye absolutamente en el carácter de cualquier reforma al Estado, lo que encierra una dimensión nunca asumida por las clases dominantes, todavía posesionadas por el racismo heredado del periodo colonial y que cruzó toda la república.

Es impensable que pueda existir un nuevo orden político sin tomar en cuenta las demandas nacionales de todos los pueblos originarios, en especial del pueblo nación mapuche, lo que de una u otra forma debería reconfigurar el Estado chileno y también al argentino.

En el proceso de adquirir conciencia nacional como pueblo colonizado y víctima de genocidio, en Chile fue el Aukiñ Wallmapu Ngulam, Consejo de Todas las Tierras, el primer actor social que actuó fuera del orden de la transición, inclusive antes de su fundación como orgánica, ya existía una decisión política que denotaba la señal de una nueva forma de resistencia cuando sus dirigentes rechazaron suscribir el Acuerdo de Nueva Imperial en diciembre de 1989. Desde tal fecha hacia adelante, se desarrolló una movilización que puso en la palestra a un nuevo tipo de movimiento social, que maniobró al interior de la institucionalidad, pero incorporó la acción rupturista, principalmente en las tomas de territorios o en la confección de la bandera y por ambas acciones, elementos centrales de un nuevo imaginario, los líderes del Consejo de Todas las Tierras terminaron procesados y presos. El orden de la transición no los aceptaba como pueblo nación, solo buscaba asimilarlos subordinadamente.

A los pocos años irrumpió otra organización autonomista, la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, que privilegió la ruptura desechando la vía institucional porque el Estado chileno, al que considera capitalista y colonial, no establece condiciones para una salida legal y por el contrario, profundiza la represión para imponer el modelo extractivista que favorece a la industria forestal, de propiedad de grandes grupos económicos. Vale decir, desarrolla la lucha nacional indígena con una perspectiva antisistémica.

La izquierda chilena debe reconocer al pueblo mapuche como una nación y apoyar como legítimas sus demandas de autodeterminación y autogobierno, así como el derecho a la rebelión. A su vez, el pueblo nación mapuche solo tiene posibilidad de conquistar sus derechos, si desarrolla un fuerte nexo con las

luchas del pueblo chileno y logra que asuma sus reivindicaciones, pero también haciendo suyas las que este levanta en la perspectiva del fin del capitalismo y la construcción de una nueva sociedad.

Un segundo elemento a considerar en la construcción del sujeto plural por los cambios, es el relacionado a las capas medias o también conocida como "clase media", una categoría construida desde hace siglos como fórmula de contención en el polarizado enfrentamiento entre capital y trabajo, o sea, concebido como un elemento supuestamente estabilizador que se ubica en el "centro" del espectro político.

Históricamente, los grupos medios en Chile se desarrollaron a fines de la colonia, el llamado "medio pelo", pero fue en el siglo XIX que se expandieron como pequeños y medianos propietarios ligados a la artesanía, la pequeña industria y el comercio, aunque políticamente, fue a comienzos del siglo pasado y al amparo del Estado, ya sea en la ampliación de sus aparatos o por el fuerte impulso a la educación, que emergieron los profesionales y los empleados sumándose a los propietarios, quienes sin constituirse en clase social se cohesionaron tras el interés común de participar en el poder, en medio de una fuerte irrupción del movimiento obrero organizado y nuevos sectores de la burguesía que ya intentaban crear una industria nacional, superando a la oligarquía ligada a la hacienda.

Así, sectores importantes del empresariado bancario, comercial e industrial, junto a la mayoría de las capas medias propietarias y profesionales, convergieron desde sus propias especificidades, asumiendo la ideología liberal y la democratización parcial de la sociedad en el marco del tipo de capitalismo que se originó a escala mundial después de la crisis del año 1929. La raigambre de mayoría izquierdista del movimiento sindical diferenció a este de los grupos medios, pero no fue obstáculo para que ambos se aliaran al sector principal de la burguesía en el orden social conocido como "Estado de compromiso".

A pesar de que el programa de la Unidad Popular consideró a los pequeños y medianos empresarios, junto a empleados y profesionales, como aliados del proceso, con intereses comunes y contradictorios con el capital monopólico, estos fueron ganados para la entonces oposición de derecha, la que operó al interior del heterogéneo conglomerado en el que los grupos de pequeños y medianos propietarios se constituyeron en vanguardia del movimiento social antigubernamental de la "clase media", al que muy prontamente se incorporaron los colegios profesionales. No obstante, el error de la dirección política de la Unidad Popular fue no ofrecerles un pacto y considerarlos solo como instrumentos utilizables en un proceso que sentían ajeno, cuestión que aprovechó muy bien la contrarrevolución.

Los primeros años de la Dictadura, los grupos medios legitimaron y defendieron el golpe, no obstante en 1975, al imponerse el proyecto de los Chicago Boys, los medianos y pequeños propietarios comenzaron a sufrir los embates del modelo y unos años después, se desestimó a los colegios profesionales, todo ello, alejó del régimen a gran parte de los grupos medios; habían quedado fuera del orden autoritario.

La continuidad del modelo desde 1990 ha obligado a la burguesía a reforzar el carácter moderador de las capas medias, las que adhieren a la meritocracia sin reparar en la desigualdad inicial y le conceden a la educación un gran valor como elemento que asegura una movilidad ascendente y diferenciadora con segmentos más bajos de la sociedad. Sin embargo, el neoliberalismo las integra buscando robustecer la expansión del capital financiero y la industria del retail, ya que constituyen el objetivo del crédito tanto de consumo como hipotecario o de estudios, aunque se genere un sobreendeudamiento en los hogares. Ello en el marco del falso estatus que les otorga el poder de compra, el que, además, constituye la forma en que se les incorpora subordinadamente al orden social ubicando el consumo como distinción. Ello

significa que el factor valórico y cultural cobra gran sentido en su diferenciación a pesar de la heterogeneidad de su composición en la que sobresale el individualismo y si bien el modelo ofrece posibilidades restringidas de movilidad ascendente, por el contrario, es la movilidad descendente la más factible, lo que le confiere un alto grado de vulnerabilidad a los segmentos más bajos, siendo el caso de la personas que jubilan el que grafica de mejor manera tal fenómeno. Dicho escenario indica que independiente del peldaño de la escala social en que se encuentren al interior de la llamada "clase media", sus integrantes no tienen intereses que compatibilicen con el capital financiero ni con los grandes grupos económicos, por tanto, deberían formar parte del sujeto plural por los cambios. Sin embargo, su heterogeneidad, que no es mucho mayor que la de los trabajadores, es un factor a considerar en cualquier alianza, así como la escala valórica a la que se aferran, en la que el aseguramiento de sus intereses y su relación con el poder y con el Estado en una futura sociedad, constituyen un factor clave.

3. Una nueva estrategia de poder

Extrañamente, el poder no es un tema de público y masivo conocimiento o manejo por parte de la ciudadanía, a pesar de ser un factor decisivo en la estructura de una formación social. Pareciera que no existiese y que la sociedad se desenvuelve en un equilibrio en el que la fuerza y el dominio de la clase dominante constituyen un fenómeno natural. Es evidente que tal imagen es construida intencionalmente para que las personas comunes no entiendan su funcionamiento y, así, su disputa se concentre en grupos de elite en los que siempre tienen ventajas las grandes corporaciones financieras, industriales, mediáticas o del retail, lo que demuestra una de las tantas deformaciones de una democracia liberal que desde sus orígenes en la antigua Grecia, siempre ha necesitado de esclavos y de colonias para funcionar.

En esta parte, es necesario plantear el rechazo a la concepción del poder como un objeto al que se asalta, tipo fortaleza La Bastilla o Palacio de Invierno, debida a que este debe concebirse como un conjunto de relaciones en las que una o un bloque de clases sociales tiene la capacidad para materializar sus intereses al establecer un dominio sobre el resto de ellas, abarcando las estructuras política, económica e ideológica de una determinada sociedad. Ello significa que subyace una relación de fuerza, debido a que si una clase tiene la capacidad de imponer su voluntad política, significa que la o las otras no la tienen.

Eso indica que el poder es relacional y condensa la relación de fuerzas, además, es desigual y asimétrico, no limitándose al Estado, ya que la potestad para establecer, mediante la propiedad de los medios de producción, sobre qué se produce, dominar el proceso de trabajo y disponer del producto, también es poder, debido a que dicha relación está determinada por el interés de una clase por encima del que tienen las otras e influye en la estructura política como en el aparato ideológico, los que a la vez consagran dicho dominio materializado en instituciones, normativas legales o entramados simbólicos que, además, influyen decididamente en entidades privadas también instauradas como centros de poder.

Asimismo, el Estado no es el origen de la ideología dominante ni es el principal eje en el que esta despliega su predominio, ya que también la expansión de las relaciones de poder ideológico se desarrolla fuera de sus aparatos. No obstante, el Estado es el principal constituyente de las relaciones de poder de clase, así como de su reproducción y, de igual forma, al concentrar y materializar el poder político, sus modificaciones determinan los cambios en los otros aparatos. La lucha por el poder es esencialmente

lucha de clases, la que ocupa un papel relevante y desborda los aparatos estatales, por lo que la actuación de estos se condiciona también a lo que sucede fuera de ellos.

Por tanto, si el poder de una clase, o sea la capacidad de imponer sus intereses, se transforma en fuerza social, esta se determina por los objetivos estratégicos propuestos con relación a la clase oponente, cuestión que introduce a la vez el concepto del orden o equilibrio frente a antagonismos irreconciliables.

En tal aspecto, si el poder también es orden de intereses opuestos, no puede tener carácter universal, sino que particular, por lo tanto, adquiere distintas formas, por ello, en relación con la izquierda chilena, lo primero que esta debe especificar en la construcción de su proyecto, son las particularidades que determinan la forma en que la clase dominante ejerce el poder en el país, ya que tal cuestión condiciona la disputa que con ella entablan las clases y grupos sociales dominados.

No obstante, de todo lo anterior surge la necesaria pregunta ¿el poder se conquista? Obviamente, que la respuesta es afirmativa, pero congruente con lo planteado, la estrategia general debe plantearse en torno a la conquista de "los poderes", aunque reconociendo lo determinante del poder político y que en el Estado capitalista chileno se concentra en el gobierno nacional.

La Unidad Popular desarrolló su estrategia de poder apuntando a la particularidad del Estado nacional, cuya estructura permitía que se alcanzase un aparato, en este caso el gubernamental, el que debía transformarse en un instrumento que serviría como eje de lucha tanto en su interior tras la conquista del poder político traducido en la construcción de un nuevo Estado popular, como hacia el poder económico, cambiando principalmente las relaciones de propiedad de los medios productivos que además pasaban a ser gestionados por los obreros, todo ello, en el marco de una crisis estructural del capitalismo, alto grado de politización de los trabajadores y gran fortaleza de su representación política. Sin embargo, fue derrotada, porque desde el propio Estado, un componente de ese poder político, las fuerzas armadas, en concomitancia con el imperialismo estadounidense, se decidieron por restaurar el orden capitalista. En tal aspecto, la izquierda no puede insistir en dicha estrategia, porque fue superada, pero sobre todo, porque el Estado, el poder político, el económico, el ideológico, la sociedad en general y el orden mundial, han variado con relación a un proceso implementado hace más de medio siglo.

Empero, tampoco significa desechar la gran experiencia del gobierno popular, sino establecer los nuevos parámetros estratégicos que sepan responder a una realidad mucho más compleja y con un despliegue mayor de contradicciones y aunque hoy es imposible elaborar un diseño de tal magnitud, si es factible determinar algunos elementos que se enfilen hacia dicho objetivo.

1. La revuelta del 2019 demostró que el Estado chileno sigue siendo el centro del poder político, pero es incapaz de mantenerse incólume en medio de una crisis y con un amplio movimiento social en las calles, al resquebrajarse y adquirir sus aparatos una alta autonomía, inclusive contradiciéndose entre ellos, por lo que lograron reponer el orden transitoriamente solo porque la salida fue compatible con lo exigido por las masas alzadas, cuyos efectos aún se mantienen como un fantasma que recorre Chile: el "octubrismo".

2. Si la izquierda está convencida de la existencia de una crisis estructural del neoliberalismo y que solamente un cambio de modelo político y económico asegura el bienestar mínimo de la población, debe hoy, no mañana, desarrollar una estrategia de cambio en la correlación de poder, ya que rearticulará su fuerza social solo si recupera la iniciativa, lo que significa comenzar a disputar simultáneamente el

poder en las tres estructuras: política, económica e ideológica, entendiendo que la contienda por el poder político del Estado será el factor estratégico de cambio de la correlación de fuerzas entre las clases.
3. Lo fundamental hoy es la movilización de las masas por los derechos del pueblo, plataforma que se politizará de inmediato a raíz de la crisis, en ella, la recuperación de la calle es el factor cardinal. Tal situación determinará las condiciones para un cambio en el poder en su primera fase, el que estará condicionado por la correlación de fuerzas y cómo esta impacta en el orden político, o sea, en el equilibrio entre las clases, por lo que se puede manifestar en un gobierno provisional o en el cambio de gobierno a través de un proceso electoral. Lo dispondrán las condiciones objetivas y subjetivas
4. Es evidente que se debe desarrollar un proceso constituyente que en definitiva es la forma, no la única, en que se debe establecer un orden social con legitimidad y representativo del interés general, pero este solo tiene posibilidad de tener éxito si es la culminación del cambio en la correlación de poder entre las clases sociales, no el inicio. En tal sentido, la pasada Convención constitucional y el plebiscito posterior son el mejor gráfico de que no se puede impulsar un cambio profundo si la correlación de poder entre las clases favorece a las fuerzas retardatarias. Es decidor que la derrota del Apruebo y de la Unidad Popular, haya sucedido mientras se mantenía un gobierno favorable a los cambios.
5. Un factor de relevancia en el tema del poder, lo constituye la construcción del contrapoder, cuyo fortalecimiento es un elemento decisivo en el cambio de la correlación de clases y una expresión de incidencia específica en las relaciones de poder dentro y fuera del Estado. No es factible desarrollar ninguna variación de envergadura en cualquier estructura de la sociedad, si no se desarrollan fórmulas de poder popular alternativo acorde con la nueva realidad del país y determinado por el carácter objetivo de la situación política y las diferentes coyunturas.
6. La perspectiva de una estrategia evolutiva en la conquista del poder es absolutamente irreal, es imposible que no se generen situaciones de ruptura, ya que un componente del poder es la relación de fuerzas entre las clases. Además, la experiencia chilena indica que ha sido la clase dominante la que no tiene reparos para romper la institucionalidad que ella misma ha creado, defendido y reproducido. La historia latinoamericana demuestra que la burguesía, las grandes corporaciones y Estados Unidos, nunca han desechado la vía armada para defender sus intereses. Una vez establecida la crisis es absurdo aferrarse a un orden político agotado, por lo que se debe pasar a la ofensiva y crear otro.
En definitiva, nuevamente, se trata de articular una estrategia de conquista del poder político de nuevo tipo, compleja y flexible, algo que no es precisamente una característica de la izquierda chilena de las últimas décadas, pero que las nuevas generaciones sabrán elaborar sin ninguna duda.

4. El contrapoder alternativo

La mañana del 11 de septiembre de 1973, la izquierda chilena comenzó a sufrir una de las persecuciones más sangrienta de la historia política del país, las fuerzas armadas actuaban impunemente sin que nadie se les pudiese oponer en lo militar, político, jurídico, moral y ni siquiera testimonialmente. Efectuaban su cruenta labor represiva de acuerdo a sus tácticas, códigos y dispositivos, con un límite impuesto por ellos mismos, no existiendo un contrapoder que se les enfrentase. Las ejecuciones posteriores fueron innecesarias debido a que ya controlaban el país, sin embargo, estas recrudecieron en octubre, porque eran parte de un plan cuyo propósito, precisamente, era eliminar los núcleos direccionales de los partidos

populares para evitar que estos los reorganizasen y reconstruyeran un contrapoder opositor al orden autoritario. De allí que los años siguientes sus servicios de inteligencia desplegaron una guerra sucia para impedir la recuperación de los partidos de izquierda y neutralizar así todo conato de resistencia.

¿Qué es el contrapoder?

Es una categoría que proviene de una construcción social y que se refiere a un conjunto de relaciones de autonomía que desarrollan las clases subalternas frente a la acción de la clase dominante. En una primera instancia se configura como una fórmula de defensa, pero cuando el orden social ingresa a un periodo de crisis, evoluciona transformándose en opción política alternativa que, entre otras cosas, se manifiesta en la creación de estructuras constituidas al margen de la institucionalidad como germen de la construcción de una nueva, las que están determinadas por la forma en que se desarrolla el proceso de expansión y agotamiento de un modo de producción y las correspondientes contradicciones de su sistema de relaciones de dominación. El contrapoder se construye a través de un proceso que se inicia en la autoconciencia de ciertas clases o grupos sociales acerca de su posición subordinada en la sociedad, asumiendo la necesidad de cambiar dicha situación o, al menos, neutralizar sus efectos más adversos, lo que es determinado por la capacidad de transformarse, desde la resistencia, en sujeto de cambio de dicha desfavorable realidad, originando una confrontación de proyectos de sociedad con las clases dominantes, enfrentamiento que asume el carácter de lucha independiente y contrahegemónica.

Se manifiesta en diferentes formas de antagonismo social, ya que su acción supone una resistencia integral al sistema de dominación, por lo que se expresa en el plano político, económico e ideológico, aunque no toda oposición radicalizada a un determinado régimen puede catalogarse de contrapoder. Sus formas están determinadas por el estadio que alcanza la lucha de clases y cuando esta se agudiza, puede desplegarse crecientemente alcanzando altos grados de desarrollo, logrando en algunas ocasiones gran capacidad para constituirse en la base de un proyecto alternativo de sociedad, a través de los órganos paralelos al entramado estatal en que se constituye, específicamente en momentos de crisis política, cuando arrecia la debilidad del Estado como instrumento de intermediación y regulación.

Como todo conjunto de relaciones, el contrapoder se desarrolla sobre la base de procesos y adquiere diversa manifestaciones acorde con las condiciones objetivas de la sociedad, así como por la conciencia y disposición de quienes desean cambiarla, por lo que su construcción y despliegue es diferente en cada formación social. En tal perspectiva, en paralelo con la fuerza y los objetivos que se plantea, sus formas de lucha oscilan entre la ruptura y la negociación y su manifestación integral se extiende a la dimensión político-social. No es objeto reducido como expresión solo del movimiento social, debido a que contiene en su entramado de relaciones a las organizaciones políticas, a los actores sociales politizados y, en la región latinoamericana, influyen en su conformación los gobiernos con proyectos alternativos.

Las características principales del Contrapoder son: a) Desafío al poder establecido, b) Diversidad de formas de manifestarse, c) Fortalecimiento del enfrentamiento político, d) Construcción de Nuevas Narrativas, d) Interacción con el poder establecido. En resumen, el contrapoder es un concepto que refleja manifestación de la lucha de clases en las estructuras de poder hegemónicas, promoviendo un cambio profundo en la sociedad.

En tal marco, el poder popular que se desarrolló durante el periodo del gobierno popular, 1970-1973, en el que destacaron principalmente, los cordones industriales, los comandos comunales, las juntas de

abastecimiento y precios, JAP, y los consejos campesino, entre otras muchas formas orgánicas, fue un tipo de contrapoder que se proyectaba en la perspectiva de la creación de un nuevo Estado popular, emergiendo de manera específica como producto del proceso de transición al socialismo, pero con alto nivel de autonomía y capacidad de desarrollo independiente. Originalmente el programa de la UP señalaba que los Comités de Unidad Popular, CUPs, organismos de base de la coalición, eran el germen del poder popular, pero estos no pasaron de ser unas pocas entidades propagandísticas electorales que se desarmaron una vez que terminó la campaña; la intensidad del proceso los sobrepasó absolutamente.

En dicho contexto, ¿es correcto en la actual situación política incentivar la construcción del contrapoder popular? La respuesta es afirmativa, principalmente, porque existe una crisis del orden político, así como del modelo económico, aunque todavía no se manifiesta en el Estado ni en la institucionalidad. Sin embargo, durante la revuelta social se desarrollaron embriones de contrapoder como cabildos, asambleas territoriales, cordones barriales, las "zonas cero" o "primeras líneas", entre variadas formas organizadas en todo el país, que fue gran demostración de madurez del movimiento social que surgió al margen del orden de la transición y en el que tuvo gran incidencia la memoria histórica, la que cohesiona un gran andamiaje cultural popular que en las poblaciones se manifestó en autodefensa y cerco y apedreo a las comisarías y, durante la pandemia, en autogestión para levantar comedores populares y ollas comunes.

Por ello, el contrapoder debe construirse hoy en su fase primaria, aunque su expresión orgánica es el producto de la autoconciencia de resistencia y cambio frente al sistema capitalista, por tanto emerge en forma masiva en momentos en que la crisis política se agudiza, pero actualmente es imprescindible su creación en términos germinales, concentrado en desarrollar experiencias y fuerzas que se acumularán para las coyunturas venideras, inclusive, en términos educativos del movimiento popular. En concreto es poner a la sociedad en movimiento, por ello, al interior de la base social tienen que implementarse relaciones no estatales ni liberales, comenzando a manifestarse premisas que son elementales y que se proyecten hacia la cimentación de una poderosa fuerza popular sustentada en la comunidad y el interés colectivo. De ellas destacan las siguientes:

Elaboración del proyecto de sociedad alternativa.

Esta materia es la más relevante, ya que carecer de una propuesta acerca del tipo de sociedad a la que se aspira, es prácticamente caminar a ciegas, por lo que sería imposible organizar forma alguna de contrapoder. Es una ficción levantar orgánicas que se proyecten hacia una institucionalidad alternativa sin tener las bases estratégicas y programáticas que determinen la lucha a desplegar y que, de una u otra manera, se ubica en la perspectiva de la disputa del poder con la clase dominante.

Desarrollo de lucha contrahegemónica.

Independiente de la construcción del proyecto como tarea política prioritaria, el contrapoder hoy se debe manifestar en la lucha ideológica, la que no siendo la única, es una de las más destacadas en cuanto al levantamiento de un poder alternativo, porque en ella se exterioriza la base conceptual que sustenta la acción política y, además, articula las ideas, obliga a una producción teórica acorde con la praxis y desarrolla estrategias de confrontación con la ideología dominante. De ella se prolongan otras formas de luchas contrahegemónicas.

- Lucha contra la individualización.
- Resistencia al consumo de la basura cultural mediática.

- Promoción de la ética con el ejemplo.
- Desarrollo de la solidaridad y la reciprocidad.
- Ejercicio de democracia directa.
- Oposición a la naturalización del poder estatal capitalista.

Organización y lucha territorial.

La experiencia indica que el territorio es la base política y orgánica del contrapoder, porque el desarrollo de las relaciones sociales que contempla desplegar, encuentra allí el espacio en el que coinciden diferentes grupos y fracciones de clase, cuestión que en otro lugar es imposible hacerlo, además, es el sector que sirve mayoritariamente de habitación, por tanto, es más permanente que el lugar de trabajo o estudio, concediéndole continuidad a cualquier comisión político o social que se efectúe.

Dirección y acción compartida.

Surge de lo anterior, ya que al coincidir en el espacio territorial un conjunto de grupos de distintos orígenes, intereses y objetivos, se generan dificultades de dos especies, una es la desviación del mando, en que uno de ellos asume que por diferentes razones, las que pueden ser antigüedad, cantidad de integrantes, capacidad financiera, desarrollo ideológico u otras varias, tiene derecho y legitimidad para apropiarse de la conducción. Por otro lado, también la actividad grupal excluyente es un error que generalmente se comete, al emprenderse ciertas competencias entre orgánicas que no tiene sentido alguno y que muchas veces, creyendo resolver situaciones, las complican.

Fortalecimiento de la autogestión.

Forma parte de un estilo de estrategia que no necesariamente es exclusiva del contrapoder, pero si una parte ineludible en su conformación, debido a que una de las características de este es la autonomía de su acción, ya que la constitución de su fuerza política y material, no puede depender de la capacidad de ayuda de la clase dominante. Tiene que saber encontrar las fórmulas necesarias para obtener recursos con sus propias técnicas y dicha función es cumplida por la economía autosustentable de comunidades que inclusive puede lograr un intercambio de bienes producidos en sistemas paralelos y al margen del mercado establecido, reordenando el consumo y estableciendo nuevos tipos de relaciones sociales.

Autodefensa comunitaria.

En esta área de trabajo, se debe partir señalando que se refiere a un derecho universal, el que no puede ser relativizado por la clase dominante. Se relaciona principalmente con el derecho a la vida, a la seguridad de las personas y las familias, al cuidado de sus bienes conseguidos con sacrificio y a la voluntad de gozar sin incertidumbre. Por ello, abarca un amplio abanico de opciones, las ollas comunes son un caso de autogestión tradicional, pero también es un acto de autodefensa, ya que esta no puede ser reducida solo a la confrontación con un supuesto enemigo del pueblo. Así y todo, es evidente que la información frente a las dificultades que pueden ser de distinto tipo, desde la delincuencia a los desastres naturales, hoy es la tarea primordial de quienes se organizan en un territorio. El objetivo central es la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones armónicas al margen del aparato represivo.

Privilegiar el conocimiento.

En el contexto del punto anterior, la necesidad de contar con capacidad y proveerse de herramientas relacionadas a los vertiginosos avances, la utilización de dispositivos de última generación y el hecho de subsistir en una sociedad compleja, ubica al saber como un arma insustituible del contrapoder, ante lo

cual, la impartición y producción de conocimiento es un objetivo prioritario, el que debe ser abordado por la organización territorial con programas complementarios a la enseñanza oficial que entrega el Estado, especialmente en aquella instrucción que sea acorde con los objetivos que se propone el conjunto de actores sociales y políticos que actúan en los territorios. En tal contexto, las ciencias y la tecnología deben constituirse en un factor coadyuvante de la acción de resistencia del pueblo, de su sobrevivencia y del establecimiento de nuevas relaciones comunitarias.

En definitiva, los puntos planteados no son los únicos necesarios de implementar en la perspectiva del desarrollo del contrapoder en la actual etapa de reflujo de masas, pero son los imprescindibles para la creación de condiciones que permitan enfrentar con cierta capacidad el momento coyuntural en que este se debe desplegar al manifestarse la crisis en plenitud. Cuando ello suceda, es factible que se desarrolle un alza en la lucha de masas y es posible que el carácter que adquiera la crisis permita la existencia de un escenario propicio para el despliegue del contrapoder y, para que dicha coyuntura sea favorable a las fuerzas alternativas, las fortalezas que se adquieran en este periodo serán las que decidirán las futuras confrontaciones de las clases populares con el poder y el orden establecido.

5. El nuevo orden y el régimen político

Tal como se señaló anteriormente, el orden político es una construcción social histórica que se crea buscando un equilibrio entre los intereses de las clases sociales en el que siempre se manifiesta la hegemonía de una de ellas, aun cuando en las crisis hay momentos de disputa, por lo que es una relación de fuerza, procede del poder político y se expresa como su materialización. Por ello, es imposible disociar la estrategia de poder, ya sea para su conquista o la defensa, de una concreta definición sobre la construcción del orden social y político.

En Chile, el orden político es neoliberal porque las relaciones y los aparatos del poder mayoritariamente se encuentran en manos del capital financiero y de los grandes grupos económicos, aunque la estructura y carácter del Estado permiten que sectores no provenientes de su representación política lo administren, pero estos lo hacen sin alejarse de los fundamentos políticos e ideológicos de la clase dominante y no han variado en un ápice el modelo económico e internacionalmente adhieren a la política de la corriente globalista. Asimismo, dos elementos constitutivos del orden muestran gran influencia, uno proviene de la fusión ideológica/económica, concediéndole al mercado un rol de estabilizador y conservador en la medida que la competencia desregulada impone lo posible por sobre lo deseable, desechando la factibilidad de alcanzar un mundo mejor. Para ello, el consumo, la moda y la publicidad aparecen como factores de legitimación del orden fomentando la apatía y la despolitización. Igualmente, se suma el rol justificador, defensor y reproductor de los grandes aparatos mediáticos como integrantes fundamentales del universo simbólico que favorece totalmente al neoliberalismo, situación que es reforzada por las encuestas, bien aprovechadas por la burguesía que las introduce como factor externo y neutral, pero que se demuestra como un componente esencial de la manipulación mediática y sostenedora del orden como recurso direccional en el marco de la inmediatez y excesivamente influyente en las distintas coyunturas.

Igualmente, otro factor lo constituye la intervención de un bloque de fuerzas compuestas por grandes corporaciones multinacionales, principalmente financieras y extractivistas, junto a la acción política y militar de Estados Unidos, así como de la Unión Europea, los que se han transformados en poderosos e

influyentes agentes que intervienen fortaleciendo el orden neoliberal, una intromisión que no es tomada en cuenta en relación con su magnitud y permitida con gran satisfacción por los grupos en el poder, de derecha o los socialdemócratas que no se cansan de promover "experiencias europeas" como ideales de aplicar en el país. Esta acción transnacional, es justificada bajo el prurito de la globalización, pero debilita el rol del Estado-nación como forma del ordenamiento político.

Asimismo, la alta politización de los empresarios chilenos, así como su mentalidad cortoplacista y la inclinación a vincular orden social y político con sus intereses, muestran una ideologización que reduce su capacidad y disposición para ceder y lograr acuerdos, polarizando el escenario político al aceptar un consenso en el que las clases populares se subordinen, politizando excesivamente el orden económico.

Igualmente, así como no se pueden disociar estrategia de poder con la producción del orden, este tampoco puede desconectarse del tipo de régimen político, el que precisamente es el espacio en el que se expresa su construcción y en donde se articulan las fuerzas políticas, económicas e ideológicas, además de ser el depositario de los acuerdos sobre los cuales se estructura el entramado institucional del Estado. El carácter del régimen político se lo confiere el orden y se mantiene como espacio de coexistencia mientras este se mantenga estable. Pero, si el orden entra en crisis, principalmente por la pérdida de legitimidad o porque no existe un consenso que sostenga el funcionamiento de las instituciones, el régimen político consecuentemente ingresa a una fase de fragilidad crítica. En dicho contexto, los intereses de las clases son defendidos desde trincheras inexpugnables y la lucha entre ellas llega a un alto nivel de contradicción que hace imposible alcanzar acuerdos y la inestabilidad se intensifica.

En Chile, el orden social y político de la transición feneció el 2019 y por tanto el régimen político se encuentra en crisis. Una etapa política de excepción fue estableciéndose como permanente, subsumiendo al movimiento social en un estado de subordinación ante un Estado y distintos gobiernos que solamente buscaron evitar el conflicto social, creando condiciones propicias para la acumulación de capital y fomentando la exclusión, de tal manera que los empresarios se transformaran en sujeto principal de la transición, aumentaran negocios y ganancias e implantasen la sociedad más desigual de Latinoamérica.

Si el orden transicional chileno se transformó en excluyente obviamente iba a originar un régimen democrático excluyente, en el que una parte importante de la sociedad civil, compuesta por quienes se perjudicaban con el modelo neoliberal, careciera de instrumentos de intermediación que permitiesen que sus intereses fuesen tomados en cuenta. Así, el sistema de partidos se desprestigió aceleradamente, con un alto rechazo y rompiendo el eje actor social/representación política.

Tal situación repercutió fuertemente en el régimen político de la transición, ya que desconectó al sistema político de los movimientos sociales que en el país históricamente han mantenido fuerte autonomía y son parte importante en el funcionamiento de las instituciones, cuestión que a su vez debilitó el orden. No debió extrañar a nadie que en la principal movilización de masas en muchas décadas, no hubiese, o no se permitiera, banderas de algún partido ni símbolo alguno que se les pareciese. De allí que el principal acontecimiento político del siglo XXI hasta el momento, el llamado por la prensa burguesa como "estallido social", alcanzase a una situación prerrevolucionaria, ya que también impactó en el conjunto de relaciones que componen el poder. Sin embargo, tal como se indicó anteriormente, la ausencia de una fuerza política que levantase un proyecto alternativo permitió que el Estado y las relaciones de poder

pudiesen recomponerse derivando el grave conflicto hacia la institucionalidad y alejaran la ruptura, pero el orden político y el régimen político quedaron gravemente heridos y la crisis persiste.
En tal sentido, la triada poder político/orden político/régimen político, es un conjunto que no se puede tratar por separado y el gran desafío de la izquierda chilena es desarrollar una estrategia de poder que abarque al conjunto de las relaciones que lo constituyen en lo político, económico e ideológico. Además, asumiendo que el poder desborda al Estado, se debe desarrollar un diseño de su control entendiendo la centralidad que ocupa, en la perspectiva de un cambio que apunte a la ruptura con el modelo político y económico de corte neoliberal y lo reemplace por uno de corte democrático. Pero de igual manera, ello supone plantear una proposición de orden social y político distinto al que hoy prevalece, lo que de una u otra manera debe llevar al reemplazo del régimen democrático representativo eurocéntrico, por uno en el que imperen fórmulas de democracia directa, participativa e inclusiva, característica del nuevo orden, cuestión que inevitablemente conduce a la construcción de un Nuevo Estado.

6. La nueva economía

Durante la Dictadura, los Chicago Boys rechazaban cualquier enmienda al neoliberalismo señalando que aquello era imposible debido a que el modelo era integral y tenían razón, por lo que el gran error de muchos "progresistas", fue emprender reformas parciales buscando encontrar una forma más "humana" en su implementación, desviación en la que aún persisten. La tendencia de su resultado es muy clara, enriquecimiento de una minoría que provoca una sideral desigualdad, lo que significa un fracaso desde cualquier dimensión que se analice, además, Chile no alcanzó el desarrollo en el 2021 tal como especuló la Concertación a comienzos del presente siglo, por tanto, el "chorreo" no tuvo su hipotética expansión.
Frente a ello no hay opciones intermedias, el país necesita otro modelo económico que apunte a su desarrollo en todos los ámbitos tras el propósito de responder a las necesidades de la población, alejado de las posiciones que lo conciben como un objetivo en sí mismo, que solo esconde la forma en que los empresarios conciben los adelantos, buscando su beneficio propio y no dudando en hacer que se pague cualquier costo humano o ambiental. Por tanto, la versión del desarrollo asumida por la izquierda, tiene como fin la satisfacción de las necesidades de la gente en el marco de una convivencia entre iguales que no tiene otro objeto que la felicidad. Para ello, un factor central es la construcción de una nueva economía, estableciendo relaciones equitativas en la producción de bienes y servicios, así como una redistribución justa de la acumulación y la equilibrada regulación de los procesos.
¿Cuáles son las bases de una nueva economía?
En primer lugar, como cuestión central, redefinir el carácter de las relaciones de propiedad y distribución del excedente en la sociedad chilena, cuestión que hoy desfavorece ampliamente al trabajo, beneficiando en demasía al capital. La propiedad social sustentada en lo estatal, comunitario y cooperativo, debe ser la base de la nueva estructura económica, pero no significa que el sector privado sea destruido, por el contrario, este ser debe parte fundamental de ella, pero inscrito en un acuerdo general, que tenga como eje la independencia nacional y la distribución equitativa de lo acumulado socialmente.
Asimismo, la propiedad social no puede desconectarse de la gestión comunitaria y ni del control por parte del conjunto de la sociedad, además, significará un proceso de transición equilibrado, determinado

tanto por la situación nacional como por las relaciones económicas internacionales, tras el objetivo central de satisfacer las necesidades de la gente sin distinción alguna.

En segundo término, recuperar la planificación social de la economía desplazando la noción de que es el mercado autorregulado su eje central, el que establece las prioridades en las relaciones económicas y sociales y, a la vez, es el mejor distribuidor de la riqueza acumulada, lo que no es cierto.

En tercer orden, se debe asumir el conocimiento como factor determinante en el proceso productivo y en el producto, lo que reestructuró formas de producción, distribución y circulación de plusvalía en el capitalismo. La crisis de los años sesenta obligó a una reactivación sistémica destacando el abandono del patrón oro, la emergencia del petrodólar, la ampliación de la red financiera mundial, la creación del sistema Swift, la desregulación y mercantilización de los recursos naturales, así como la profundización de la autorregulación de los mercados y la liberalización del comercio internacional. De igual modo, se flexibilizó el mercado del trabajo y debilitó a los sindicatos, reorganizando la producción utilizando la intermediación numérica de la información, loe que acrecentó el sector terciario. Así, el conocimiento se objetivó, aumentando su condición de fuerza productiva, controlando inclusive gran parte de la vida social. Surgió un nuevo orden que aumentó la subordinación del trabajo al capital y reordenó objetivos aspiracionales justificando a una elite cercana al poder que monopoliza saber especializado y acreditado. De tal manera, priorizar el conocimiento impone intervenir sistemas educativos, modelos de enseñanza e investigación, proceso en el que la comunidad es fundamento de cualquier reforma.

En cuarto lugar, algunas medidas estratégicas son insoslayables, una de ellas es la intervención del sistema financiero para terminar con la extendida especulación que alcanza a niveles delictuales y, a la vez, democratizar el crédito, además, poner fin a la aparente autonomía del Banco Central, entidad que depende en términos absolutos de los centros financieros estadounidenses como la FED. La otra reside en nacionalizar las riquezas básicas, principalmente el cobre, litio, molibdeno y las tierras raras y, una última, consiste en reorientar la agricultura hacia la sustentación ecológica en la perspectiva de asegurar la independencia alimentaria y el manejo sostenible de las tierras. En tal plano, es importante destacar que en el mundo se produce más del doble de los alimentos necesarios para proveer a toda su población, no obstante, la mitad de ellos se destina a agrocombustibles, con alto impacto al medio ambiente, a la biodiversidad y a la salud de la gente y, según la ONU, 600 millones de personas padecen hambre.

Quinto, crear un sistema nacional de desarrollo del conocimiento, que priorice las ciencias básicas como las aplicadas, con un correspondiente subsistema de transferencia tecnológica que pueda ser beneficioso para el ecosistema de investigación y una clara reorientación del subsistema nacional de innovación.

En sexto término, cualquier propuesta programática económica debe toma en cuenta que el país deberá continuar transitoriamente siendo extractivista y tendrá que rediscutir los tratados de libre comercio que lo perjudican, mientras se robustece la base de su nueva economía, pero, sobre todo, porque, debe implementar un programa de emergencia destinado a satisfacer demandas inmediatas de los sectores populares, las que son imposibles de postergar y requieren de recursos. Pero, todo ello impulsado en el marco de un desarrollo sostenible priorizando el resguardo de los ecosistemas.

La nueva división del trabajo que hace tres décadas relocalizó segmentos de los procesos productivos en lugares del planeta en que se obtenían mejores condiciones de productividad y precio, creó las cadenas de valor, un conjunto de actividades de fabricación de bienes desde su concepción hasta la venta

minorista ubicadas en distintos países del mundo, en la que pueden participar distintas empresas de cualquier parte del orbe, especializándose en uno de sus eslabones. Funciona operando bajo el sistema "just time", mantiene una jerarquía y aquellas con aplicación intensiva de conocimiento se encuentran en el primer nivel, mientras que las que se dedican a la producción y exportación de materias primas están ubicadas en el peldaño inferior. Pero, hoy, la disputa geopolítica está reestructurando absolutamente las cadenas globales de valor. En tal sentido, Chile no puede autoaislarse, como integrante del grupo de naciones con un desarrollo desigual y periférico, subordinado a las grandes potencias lideradas por Estados Unidos, tarde o temprano, se verá involucrado en la disputa que este mantienen con China, en la que comienza a imperar el proteccionismo y las definiciones ideológicas, por lo que es un problema político. Los casos del cable de fibra óptica, de la fabricación de pasaportes, de Tianqui en SQM y del acero, entre otras, grafican el efecto de la presión de Washington, cuestión que podría obligar al país a relacionarse en el largo plazo, solo con una parte de la economía mundial e intervenir en forma secundaria en una competencia sin la participación de China, perjudicando el interés nacional.
En dicho sentido, bajo ningún motivo el país puede tolerar la pérdida de su soberanía, así como permitir que la economía se vea dominada por el poder monopólico y monopsónico de las compañías extranjeras, cualquiera sea su origen.

7. La transición a la nueva sociedad

Todo paso que en Chile se encamine en la senda hacia una nueva sociedad estará determinado por la más profunda democratización de esta y el establecimiento de una nueva concepción de las relaciones sociales en la que la individuación extrema, utilizada como instrumento decisivo de la dominación, sea reemplazada por una nueva racionalidad solidaria y comunitaria que asocie bien común con el bien social. En tal contexto, una etapa de transición es el paso necesario para crear y desarrollar los fundamentos de la nueva sociedad y, en ella, la participación de la comunidad organizada y el rol facilitador del aparato de Estado, tienen un papel decisivo, así como la situación internacional, por el carácter dependiente de la formación social chilena. Estos tres elementos son la clave de la fase, ya que sobre dichas bases se establecen los cambios estratégicos.
¿Cuándo comienza la transición? Es evidente que lo determina la correlación de clases y si bien tiene coyunturas estratégicas en función de un cambio, es un proceso que se debe iniciar desde que existe una autoconciencia de las fuerzas del trabajo y demás movimiento sociales, acerca de la necesidad de convertirse en sujetos que aspiran a reemplazar el capitalismo por una sociedad en la que predominen sus intereses, cuyo resultado es el inicio de la marcha para construir el proyecto alternativo de sociedad. Sin embargo, en el marco de sus acciones reivindicativas, especialmente, económicas y sociales, las clases subalternas emprenden una lucha a través de sindicatos y otras múltiples formas de organización, en la que desarrollan una intensa praxis colectiva de movilización transformada en escuela natural para el fomento de experiencias solidarias y de reciprocidad, elementos constitutivos de una fuerte lucha ideológica que se debe iniciar bajo el capitalismo en términos defensivos y que traspasa las distintas fases, pero que en una transición se transforman en un factor esencial.

El conjunto de medidas, iniciativas y disposiciones destinadas a generar la profunda democratización de la sociedad, es el proyecto que muchos compañeros y compañeras denominan República Democrática de los Pueblo, cuyas bases se proponen a continuación.

La República Democrática de los Pueblos

A modo de introducción, es necesario recordar que la ONU en el 2015 aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 169 metas y 231 indicadores, cuyo plazo de cumplimiento es el 2030 y que tienen entre sus aspiraciones: erradicar la pobreza extrema y el hambre, eliminar las desigualdades, proteger los derechos humanos, promover el empoderamiento de género, garantizar el desarrollo económico, social y ambiental, entre otras. Se evalúa que no se estarían cumpliendo las metas y en general se ha avanzado solamente un 16% y, por razones obvias, ya se solicitó ampliar el plazo.
El gran problema del evidente y dramático fracaso es la ausencia de una política de cambios sistémicos, ya que mientras el capitalismo sea la base del patrón de desarrollo sobre la cual se sustenta su implementación, no habrá posibilidad de que se cumplan dichos propósitos.
Ello ratifica la idea de que se necesita otro modelo de desarrollo, afincado en un cambio del modo de producción y consumo, lo que requiere de ciertos requisitos políticos, siendo el principal de ellos, tal como ya se mencionó, la profunda democratización de la sociedad, cuestión que ubica al proyecto de república democrática como el objetivo central y estratégico de la izquierda chilena para el periodo. De su concreción dependerá la construcción de la nueva sociedad, en un proceso ininterrumpido, en el que se generará la ruptura con un capitalismo con el que se tendrá que convivir, pero que se ubicará en un estadio de subordinación con relación al nuevo orden que emergerá, en la perspectiva de su definitiva superación.
¿Cuáles son los prerrequisitos políticos necesarias para el inicio de la transición?
1°) Construcción de la dirección político-social del pueblo.
2°) Desarrollo del contrapoder.
3°) Organización del frente político social.
4°) Elaboración del programa y de sus medidas inmediatas.
5°) Despliegue de la movilización popular.
6°) Lucha ideológica para transformar el universo simbólico.
7°) Lucha política tras el cambio de la correlación de fuerzas.
8°) Asegurar una alianza de apoyo internacional.
9°) Acceder al principal centro de poder del Estado.
Estas premisas son las principales, no las únicas, que se necesitan para que el movimiento popular pueda iniciar un proceso de transición política y es evidente que el factor determinante será el acceso al principal centro de poder del Estado, específicamente el gobierno, y que la vía debe ser la institucional, pero aquello estará determinado por el carácter de la crisis y la respuesta de la clase dominante, tal como se señaló, siempre tendrá que existir una combinación entre institucionalidad y ruptura democrática.
Consecuentemente, el proceso de transición deberá abocarse a ejecutar un conjunto de tareas que sienten las bases de una nueva sociedad en el marco de un orden político efectivamente democrático que será la confluencia de los intereses de las distintas clases y capas sociales, así como de los diferentes segmentos

identitarios y de las naciones originarias, en definitiva, del conjunto de pueblos llamados a conformar el movimiento por el cambio estructural que supere el capitalismo. En tal sentido, las tareas a emprender son de dos tipos, algunas de carácter inmediato y destinadas a satisfacer las demandas urgentes de los pueblos postergadas por el modelo neoliberal y, por otro lado, aquellas que sean el inicio de la instalación del nuevo orden social, tras el objetivo concreto del cambio. Entre ellas destacan:

- Amplia intervención de la ciudadanía en las decisiones, por lo que debe impulsarse un nuevo régimen democrático altamente participativo que desarrolle dispositivos vinculantes y de control social.
- Reestructuración de los sistemas de salud, educativos, de pensiones y seguridad social, entendiendo que estas, junto a otras, constituyen las demandas más urgentes y necesarias de resolver.
- Introducción de la ideas de solidaridad y reciprocidad concibiendo ambas nociones como la base de la convivencia entre los integrantes de una comunidad con valores distintos.
- Sentar las bases de la nueva economía rescatando el concepto de desarrollo desde una perspectiva de igualdad e independencia en el marco de relaciones mundializadas.
- Impulsar el equilibrio socioambiental sostenible, proyectando una nueva racionalidad de respeto a la Naturaleza, su entorno y todos sus componentes.
- Avanzar hacia una agricultura ecológica optimizando los recursos naturales que generen un cuidado a la tierra para obtener alimentos saludables y nutritivos asegurando una mayor calidad de vida.
- Asegurar la equidad de género en el trabajo formal, pero sobre todo, resolver el abuso que se genera en la economía doméstica, así como distintos trabajos no remunerados, como el de cuidados, que se ha transformado en un verdadero subsidio a la economía capitalista por parte de mujeres y niñas.
- Autodeterminación del pueblo mapuche. Se debe resolver la situación del pueblo nación mapuche y de todas las naciones originarias en el marco de la autonomía y el derecho al autogobierno y resolución de la propiedad de sus tierras ancestrales, como factores básicos.
- Relaciones exteriores independientes en el marco del Sur Global. La base de la participación en el nuevo orden mundial debe ser la autonomía en el contexto de la libre autodeterminación de los pueblos y la solidaridad internacional, asumiendo que la prioridad se encuentra en la integración con las naciones que constituyen el Sur Global y particularmente, la región sudamericana.
- Fuerzas armadas como actores del desarrollo nacional. Deben integrarse a las políticas de desarrollo en el marco de conectar la defensa a la independencia nacional, al margen de cualquier potencia extranjera y, coherente con el punto anterior, articuladas en el plano regional sudamericano.

8. Inserción en el nuevo orden mundial

Chile es un país que debe asumir una gran decisión en el orden mundial emergente y definitivamente dejar de ser un agente dependiente de la corriente globalista, tal como lo ha sido desde los años noventa, significando un amplio giro en su inserción internacional, la que muestra alta dinámica ante los cambios generados en la correlación de fuerzas. En tal marco, el enfoque geopolítico ha adquirido gran jerarquía al que se supeditan la economía y lo ideológico, de allí la dimensión militar que, como siempre, alcanza a la tecnología y el dominio de quienes la producen, como sucede con la Inteligencia Artificial, cuya aplicación no solo se reduce a las armas autónomas, sino que abarca todo el proceso de la guerra.

Como se indicó con antelación, uno de los ejes de la confrontación geopolítica es el control de Eurasia, establecido como la masa de territorio que determina el dominio mundial y, en ella, se ubican los tres escenarios de guerra más sensibles, Ucrania y Europa Oriental, Palestina y el Asia Occidental o Medio Oriente y Taiwán en el Asia Oriental. La definición de dichos "conflictos", decidirá el carácter del nuevo orden mundial, en una confrontación que abarca un sinnúmero de contradicciones. El planeta ya no será como antes, es un cambio de época. Frente a ello, la derecha chilena, así como la mayoría de la alianza gobiernista, a excepción de una tendencia del PC, tomó partido por el bando que lidera Estados Unidos y sus aliados como la Unión Europea, Japón, Australia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda y otros. En tal escenario, América Latina es actor secundario, históricamente dependiente de Washington y, Chile solo entre fines de 1970 y septiembre de 1973 mostró un decidido principio de autonomía.

En tal aspecto, una ideologizada derecha no tiene dudas en su adhesión a las políticas estadounidenses ni se esmera en elaborar teorías que lo justifiquen. En el gobierno, Frente Amplio y socialdemócratas han adherido incondicionalmente al globalismo, sin asumirlo en forma abierta, pero todas sus actuaciones así lo confirman. Es el caso de ciertos cientistas de la ex Concertación que publicaron un texto planteando el "No alineamiento activo", como fórmula de inserción en el orden mundial, según su planteamiento, configurado por el choque entre China y Estados Unidos, patrocinando seguir el ejemplo de Europa y mantener una posición autónoma. Obviamente, al margen del absurdo de pensar que Chile tiene fortaleza para permanecer incólume frente a las dos potencias y jugar con ellas en una especie de triángulo político amoroso, introducen de contrabando una supuesta independencia europea y, lo más importante, no plantean un diseño del no alineamiento, en concreto, asumen continuar con la actual situación, o sea, alineados al globalismo. Esa es la postura del gobierno, que no ha tenido problemas en obedecer a Estados Unidos, pero aparenta tener una posición de "neutralidad".

En dicho sentido, dos son los aspectos que definirán la política internacional en un proyecto alternativo en el marco del respeto a la autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos, el primero es la articulación regional sudamericana y el segundo es el ingreso al BRICS.

Constitución de un bloque regional sudamericano

En la nueva división internacional del trabajo, la Inversión Extranjera Directa, IED, junto a las cadenas globales de valor que vinculan a más de un 70% del comercio mundial, se han constituido en la clave de la expansión del capitalismo, en el que la deslocalización de la producción de bienes, la especialización en los procesos y la competitividad concentrada en algunas de sus fases, rearticularon también los servicios impulsados por las nuevas tecnologías de la comunicación y en el que los aspectos logísticos y del transporte, así como los puertos, pasaron a tener mayor relevancia. La ubicación de los procesos productivos en diversos territorios, incentivó al capital financiero a construir una normativa global, que uniformase medidas regulatorias, de resolución de controversias y un nuevo régimen de propiedad intelectual, primando los intereses de Estados Unidos, además de aplicar normas de la legislación comercial global a otras áreas de la economía como los servicios y la inversión, que rigen más allá de las áreas de decisión de los Estados nacionales. Inclusive desde el Foro de Davos se inventó una categoría especial para denominar dicho proceso: "la gobernanza global".

No obstante, la gran expansión se desaceleró por distintos motivos, disminuyendo el comercio y reduciendo la IED: la crisis subprime, la división del bando capitalista, la irrupción de China con un modelo alternativo, la Covid-19, el proteccionismo estadounidense y europeo, así como la misma complejidad alcanzada por las cadenas de valor que hoy se encuentran en plena reconfiguración, derivaron el problema hacia un enfoque eminentemente político. Estados Unidos comenzó una fase proteccionista y a pesar de su gran interconectividad con China, esta será expulsada de las cadenas de valor, desde la fase de extracción de recursos naturales, pasando por los diversos insumos, el diseño, la logística, transporte, distribución y financiamiento. La guerra está declarada y Estados Unidos no solo busca contener a China, sino que anhela revertir el nivel que alcanzó su expansión en el subcontinente y le exige a Latinoamérica que se le una en esta cruzada para defender el "mundo libre", obviamente que en el marco de la doctrina que obliga a una potencia a impedir que surja otra que pueda competirle.

Debilitada la globalización resurge la importancia de los Estados nacionales y las articulaciones regionales, por lo que la lucha por obtener gobiernos aliados, así como áreas geográficas de influencia, se está tornando feroz y despiadada. No obstante, entre los muchos factores diferentes del actual orden con la Guerra Fría, se encuentran las articulaciones regionales, que corresponden a potencias intermedias como Turquía, Brasil, Irán, Arabia Saudita, Sudáfrica o México, entre otras, que pueden participar en la nueva situación internacional con mayor expectativa.

Frente a ello, América Latina en su conjunto tiene un bajísimo nivel de exportación y más de la mitad son recursos naturales y el llamado superciclo de las materias primas y la alta importación de productos manufacturados desde China, fomentaron la reprimarización de sus economías, además, mantiene un reducido intercambio intrarregional, con el agravante de que las cadenas de valor asociadas a recursos primarios tiene menos cuantía que aquellas con una aplicación intensiva de conocimiento, determinadas por la innovación y alto nivel del capital humano.

En tal escenario, Chile solo puede tener futuro si reorienta su política exterior y fomenta una integración regional, como mínimo, sudamericana. Por su debilidad es imposible que pueda enfrentar el mundo que viene en solitario o subordinada a los designios de alguna potencia. Pero, conspira en contra de tal objeto la errada política que ha mantenido los últimos 50 años, en la que se ha obedecido absolutamente a las distintas facciones que han gobernado Estados Unidos, convirtiéndose en correa transmisora y ejecutora de las estrategias de Washington. Además, las relaciones con las naciones fronterizas siempre han sido complicadas. Retomar una iniciativa como Unasur, proyectándola a una acelerada y efectiva integración, será un factor estratégico para un futuro desarrollo sostenible.

Chile debe ingresar al BRICS

En el actual proceso de rearticulación de fuerzas a escala mundial, mantener la independencia nacional no significa aislarse sino, por el contrario, promover una política de inserción acorde con los objetivos de desarrollo sustentable que el país debe asumir, pero ella debe estar determinada por las alianzas que convengan a dichos objetivos. En tal plano, así como la única posibilidad de surgir es participando en la construcción de un bloque regional sudamericano, con relación al orden mundial, la ubicación de Chile se encuentra en el Sur Global. No solo por la trayectoria tercermundista que alguna vez mantuvo, sino

porque, debe incorporarse a la corriente civilizatoria que rechaza el universalismo liberal que sostuvo la expansión capitalista y que rescata la especificidad de cada país o conjunto de ellos.
Asimismo, es absurdo que haya una resignación a subordinarse perpetuamente a Estados Unidos, ya que además, no existe posibilidad de que se construya una gobernanza global de corte unipolar tal como lo desea el capital financiero y las corporaciones tecnológicas, extractivista, mediáticas y el complejo industrial militar. El futuro es la multipolaridad que no se refiere solamente al plano de los Estados nacionales, sino a las cosmovisiones y modos de vida y normativas sociales y políticas. Por ello, Chile debe ingresar al BRICS, ya que es la forma concreta de ubicarse en el bloque del Sur Global. No existe ninguna razón, que no sea el alineamiento a Washington, para rechazar una incorporación que solamente traerá beneficios y que lo insertará en forma plena a un conglomerado en el que vive un alto porcentaje de la población mundial, sumamente fuerte económicamente y con expectativas de que sus países sean los más desarrollados del planeta en un futuro no muy lejano.

9. Las fuerza armadas y la independencia nacional

Es imposible comenzar a analizar el papel de los militares en una futura república democrática si no se establece el tema del monopolio de la armas.
¿A quiénes en Chile se les permite tener armas de fuego legalmente?
No solamente a los miembros de las fuerza armadas, policiales o de gendarmería, todos ellas y ellos, funcionarios del Estado, sino que también a cientos de empleados de las empresas de seguridad, además de otro miles de civiles, especialmente, uniformados en retiro y, en el plano de la ilegalidad, se suma el pertrecho ilegal en manos de organizaciones criminales y del narcotráfico. La diferencia está en el tipo de armamento, el carácter de la institución y la formación de efectivos, ya que las fuerzas armadas y ciertos destacamentos de carabineros, se encuentran preparados para una situación de guerra, por lo que su poder de fuego, presupuesto y eficiente preparación, junto a un extenso aparato logístico, de infraestructura, inteligencia y tecnológico, constituyen el gran contraste.
Históricamente, las fuerzas armadas han sido obedientes al mando y participan en la vida política del país con más frecuencia de lo que muchos creen y se han transformado en vehículo de represión en muchas oportunidades, todas ellas, en contra de los sectores populares, a excepción de algunas pequeñas acciones como fue el caso de la matanza del Seguro Obrero en contra de jóvenes nacistas.
A pesar de su participación en asuntos políticos en situaciones clave del país, se debe insistir en el carácter nacional de las fuerzas armadas, su obediencial al poder civil y la no deliberación entre sus filas, entendiendo que sus misiones las determinan los estamentos estatales que la Constitución establece, así como sus inquietudes se comunican mediante conductos institucionales. También, se sobrentiende que la planificación de su capacidad combativa, infraestructura y formación se manifiesta en el largo plazo.
En tal sentido, la política de defensa del país, que abarca numerosas áreas más allá de lo estrictamente militar, debe ser un conjunto articulado y dirigido por el presidente de la república. Asimismo, aspectos que parecieran no conectarse a dicha área actualmente se transforman en factores de gran incidencia en cuanto a que definen áreas estratégicas de la defensa nacional, siendo el complejo científico tecnológico uno de ellos, en especial, la integración de la Inteligencia Artificial Militar, IAM, factor que hoy es decisivo en la disputa geopolítica mundial, una tecnología que se instaló en todas las fases de la guerra.

Igualmente, tiene que ver con la capacidad económica del país debido a lo rápido que se constituyó el mercado de la IAM, el que crece exponencialmente estructurándose en hardware, software y servicios, por lo que el acceso a los dispositivos es vital, ya que intercede directamente en la capacidad combativa como disuasiva de la fuerza y, al mismo tiempo, sus aplicaciones actúan en el conjunto de actividades militares, debido a que lindante a la utilización directa en el combate a través de robots, drones u otras armas autónomas, participa en ciberseguridad, mando y control, inteligencia, logística, comunicaciones, detección y precisión en objetivos, tecnología de enjambre, modelado y simulación, reconocimiento táctico, recopilación y procesamiento de datos y entrenamiento. Además, contribuye a perfeccionar los análisis predictivos, decisiones estratégicas, desarrollo de armas biológicas y procesamiento de misiles, entre muchas otras áreas de la defensa.

Mención aparte precisa la llamada "guerra cognitiva", una forma de enfrentamiento no convencional que siempre ha existido, destinado a debilitar el imaginario de la estructura social y cultural del país al que se ataca y que actualmente adquiere una nueva dimensión por los adelantos desarrollados en la tecnología de las comunicaciones, la cibernética, la robótica y la inteligencia artificial. Se implementa conformando verdaderos cuerpos de ejército que mantienen alta autonomía, inclusive actuando por sí solos antes o al margen de la confrontación bélica propiamente tal. La manipulación se transforma en el arma utilizada para influir en la percepción y concepción de la ciudadanía subdivida en grupos considerados como público objetivo, transformados en microclimas segmentados y fácilmente manipulables, a los que se atraen o se les incita al enfrentamiento fratricida, escenario en el que las corporaciones multinacionales propietarias de las plataformas digitales son decisivas, al margen de que muchas de ellas son financiadas por servicios de inteligencia que las usan por el acceso a los datos y como armas de guerra psicológica.

En dicho contexto, es evidente que abastecerse de componentes de última generación en el mercado del Hemisferio Norte, no solamente aumenta la dependencia, sino que es sumamente delicado el estar sujetos a lo que decidan vender las grandes potencias, por lo que un factor estratégico es tener un complejo tecnológico militar propio, en el que la investigación como la fabricación de modernos equipos sea una prioridad. Igualmente, será una tecnología que debería ser transferida al aparo productivo nacional, ya que es sabido que las grandes innovaciones provienen de la industria de la guerra y de la exploración espacial. Dicha política sería el eje de un concreto aporte a la relación civil militar, más allá de las labores relacionadas a las catástrofes climáticas o sísmicas, junto a lo quehaceres ligados a la seguridad interior como últimamente se ha planteado, una cuestión sumamente discutible.

La defensa nacional y el nuevo orden mundial

Las crecientes disputas entre los BRICS y el G7 también ha reconfigurado un nuevo escenario en lo concerniente a la seguridad regional, en especial, la hegemonía histórica que Estados Unidos mantiene en Latinoamérica, cuya política de defensa se conservó invariable durante las pasadas décadas, aunque adquirió gran dinamismo los últimos años a raíz del aumento de la presencia de la República Popular China en la región, sobre todo en la esfera comercial, pero que desde el 2016 se amplió a otros ámbitos como parte de una estrategia global en el contexto sur-sur y que incluyó las relaciones militares.

Estados Unidos desde los inicios del siglo XIX considera que el continente es parte fundamental de lo que denomina el Hemisferio Occidental, en el que impone su hegemonía sin contrapesos, por ello, en lo

referente a su seguridad nacional, le confiere al continente una importancia estratégica, encuadrada en lo que denomina un "sistema interamericano de defensa".

Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, el gran enemigo que era la Unión Soviética dejó de existir, por lo que disminuyó su actividad en esta esfera, concentrando su atención en adversarios menores como el narcotráfico para luego, en el 2001, involucrar al subcontinente en la guerra contra el terrorismo. No obstante, la irrupción de gobiernos izquierdistas, propensos a la autonomía, entre los que destacaba el encabezado por Hugo Chávez, obligó a Washington en el 2008 a reorientar su política de defensa reestructurando el Comando Sur o SouthCom, proceso en que destacó la reactivación de la Cuarta Flota, creada en 1943 y disuelta en 1950. El lento giro hacia una intervención mayor comenzó a desarrollarse cuando en el 2017, la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense definió, abiertamente, a China como enemigo principal y necesario de contener, cuestión que en Latinoamérica se manifestó en una inusitada injerencia del SouthCom en los asuntos internos de países en los que aún le resulta factible aplicar la Diplomacia de Defensa que históricamente la Casa Blanca ha desplegado en la región. Así en el 2018 acordó el programa "Amistad y Cooperación para las Américas", que delineaba el plan estratégico. Del SouthCom, con sede en Miami, dependen, además de la Cuarta Flota y el Comando Sur de las Fuerzas Navales, el Ejército Sur, la Fuerza Aérea del Sur, la Infantería de Marina del Sur y el Comando de Operaciones Especiales del Sur. Por otra parte, mantiene en Latinoamérica 56 bases militares siendo Guantánamo, Cuba, la más antigua, además de 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras, 2 en Paraguay, agregándose Aruba, El Salvador y Costa Rica**.**

En tal contexto, los estadounidenses tienen alta supremacía por la extensa labor desarrollada en dos siglos, con invasiones militares incluidas, así, la ejecución de su nueva-vieja estrategia abarca diferentes frentes y formas en el marco de la defensa hemisférica, en la que conceptos como panamericanismo, interamericanismo, asistencia recíproca, seguridad cooperativa, ayuda humanitaria, amparo del mundo libre y otros, justifican la existencia de instituciones que plasman su presencia militar en Latinoamérica.

La política de seguridad de Washington con relación a la región es esencialmente geopolítica, por lo que su implementación abarca diversas áreas y, junto con la estrategia de contención a China desarrolla una política de control de fuerzas, territorios y recursos, lo que explica la intervención de la general Laura Richardson, quien abiertamente señala como el enemigo al eje Rusa-China-Irán y en lo regional a Cuba, Venezuela y Nicaragua, agregando que la prioridad estadounidense es asegurar que materias primas estratégicas como el litio, cobre, tierras raras y el agua, permanezcan en "manos amigas y confiables".

Además, ampliando su control, el SouthCom interviene al interior de ejércitos y policías de la región a través del apoyo financiero, maniobras conjuntas, entrega de armamento, entrenamiento y asesoría en inteligencia, bajo la excusa de atacar el crimen organizado o ayuda en desastres naturales, sirviéndose de la creación de un escenario del miedo en la ciudadanía, que justifica su presencia en distintos países.

A ello se agrega lo que realizan entidades como la Central Intelligence Agencia, CIA, la Drug Enforcement Administration, DEA y la United States Agency for International Development, USAID, las que se complementan con el Council of The Americas, COA, fundado por corporaciones privadas, entre ellas, la de Rockefeller. Al mismo tiempo, cuenta con un poderoso bloque militar de apoyo conformado por países de la OTAN como Francia y Reino Unido, junto al respaldo del Mossad israelí.

Frente a ello, hasta hace un par de décadas la presencia de China en Latinoamérica era esencialmente comercial, pero el despliegue de la Ruta de la Seda mostró un cambio de estrategia, ya que más allá de la inversión en infraestructura y transporte, es un proyecto geopolítico destinado a instalarse en la región y resguardar sus negocios, asegurando las rutas comerciales y garantizando el abastecimiento de materias primas estratégicas, escenario que la obliga a disputar la hegemonía a Estados Unidos, una situación en la que el despliegue militar es ineludible y que constituye un desafió formidable debido a la monumental diferencia con el coloso norteamericano. Sin embargo, demostrando gran decisión, China acrecentó su relación con países del subcontinente comenzada tímidamente los primeros años del presente siglo y es evidente que más allá del área geográfica latinoamericana, tiene en la Antártida un objetivo presente.

La estrategia de la nación asiática concentra en la venta de armamentos, traspaso de tecnología y maniobras conjuntas, las principales actividades de su relación militar con Sudamérica, aprovechando algunas ventajas como la desideologización de sus servicios, a diferencia de Estados Unidos, por lo que extiende sus contactos y ejercicios a gobiernos de derecha, además, sus préstamos tienen exigencias menores y su tecnología es similar a la estadounidense, distinguiéndola de Rusia, el indispensable socio que intenta reinstalarse como potencia global y que, en este ámbito, se transforma en su competidor.

Debido a lo expuesto, la política de defensa de Chile se debe sustentar en la independencia nacional y tiene que tomar en cuenta las variaciones en el escenario mundial y regional reparando en dos elementos básicos, primero, no puede estar supeditada a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y, en segundo lugar, las relaciones en el contexto sudamericano son cruciales, aun cuando con relación a los países fronterizos, estas tengan un nivel de complejidad por el contradictorio nivel de amigo/enemigo que se manifiesta, entendiendo que es un problema esencialmente político. En momentos en que Unasur era un proyecto viable se avanzó en constituir una política común de defensa creando el Consejo de Defensa de América del Sur, iniciativa brasileña que avanzó en dos líneas específicas, una era la creación de un Centro de Estudios Estratégicos de Defensa y la otra, una Escuela de Defensa Sudamericana. Nada prosperó, la llegada de gobiernos de derecha desechó la iniciativa, naturalmente fue una idea de la Casa Blanca y del Pentágono, ya que se contradecía con la “seguridad hemisférica”.

Ante tal situación, solo una política basada en la independencia nacional puede potenciar la defensa del país, no existe otro camino, ya que debe ser congruente con el proyecto de una sociedad autónoma en la que el desarrollo del país y la defensa converjan en el plano de la autodeterminación.

10. Los partidos y el frente político social

La gran tarea por lograr una nueva sociedad no sucederá por generación espontánea, sino de manera planificada y con alto grado de organización, conocimiento y decisión política del pueblo. En ello, la constitución de la fuerza político-social es factor determinante, en la que partido político y movimiento social son partes inseparables, aunque en muchos momentos caminen alejados. En tal contexto, la fuerza social es el elemento estratégico y la organización política es el agente táctico, aunque el carácter que tal disposición tiene en un proceso democrático revolucionario depende de la praxis.

En Chile, la particularidad radica en que los actores sociales que levantaron un proyecto alternativo de sociedad anticapitalista son anteriores a los partidos, los que fueron creados precisamente cuando los trabajadores concluyeron en la urgente necesidad de fundar sus propios instrumentos políticos clasistas a

comienzos del siglo pasado. Vale decir, a raíz del alto desarrollo de conciencia crearon su adecuada representación social, las mancomunales, así como sus propios partidos políticos, primero el Partido Obrero Mancomunal y luego el Partido Obrero Socialista. Contrariamente, en la mayoría de los países latinoamericanos los sindicatos fueron creados por activista políticos ácratas, así como los partidos clasistas se escindieron de agrupaciones socialdemócratas, por lo que en el país la construcción del movimiento popular adquirió otras características que le confieren su propia especificidad.

Por ello, es impensable el esquema tradicional del partido vanguardia y conductor de un movimiento social que actúa como correa transmisora en una versión particular del esquema comando-ejecución. Pero, la fórmula alterna no existe en teoría y deberá ser elaborada en la práctica, al calor de la lucha y todo indica que será una combinación entre los partidos populares y un movimiento social acostumbrado a funcionar en forma autónoma, aunque en muchas oportunidades ha dependido de ellos como sucedió durante la Dictadura, los que a su vez, se abastecían de militantes, fondos e infraestructura, desde sindicatos, federaciones estudiantiles, entidades barriales o centros comunitarios católicos.

Asimismo, tal como se señaló, en los 30 años de la transición parte importante del movimiento social fue cooptado por la Concertación, degradándose en conciliaciones que favorecieron a los empresarios, por lo que surgieron nuevo actores sociales al margen del orden político, con mayor autonomía y diferentes particularidades y que lucharon casi en solitario para imponer sus demandas, inclusive fueron atacados por los partidos del orden y quienes estaban de acuerdo con sus posiciones eran muy frágiles, lo que es una realidad muy concreta a tomar en cuenta. De igual manera, la debilidad de los partidos de izquierda imposibilita en forma absoluta, en la actualidad, establecer nivel alguno de conducción o de orientación, ya que ni siquiera han cumplido su principal labor que es desarrollar un proceso de elaboración de un proyecto de sociedad alternativa. Por lo que la clave será aplicar una interacción entre iguales, que apunte a construir una dirección conjunta, pero que sea la culminación de una estrecha relación desde abajo, pero que tampoco se reduzca al localismo o al economicismo.

No obstante, hay dos problemas necesarios de resolver, uno se ubica en el plano de lo teórico y tiene que ver tanto con aspectos metodológicos como epistemológicos, ya que es evidente que, entre otras cosas, se deben dejar atrás muchos esquemas tradicionales, inútiles para el análisis de realidades complejas y con grados de incertidumbre. Además, con relación a la dimensión epistemológica, más que en el logos, se debe profundizar en lo referente a la espisteme, ampliando la discusión a lo cosmogónico, cuestión que efectivamente permita expandir los análisis hacia concepciones nuevas acerca de la totalidad.

En segundo lugar, la antigua noción de partido de cuadros obedientes a las direcciones no puede ser un freno a la creatividad y a la iniciativa de los militantes y dirigentes, un factor esencial a la hora de enfrenar situaciones inesperadas o ante la necesidad de innovar. Vale decir, desde lo teórico y lo orgánico, los partidos requieren estar en permanente construcción y su principal enemigo no radica solamente en la acción de fuerzas retrógradas o del Estado capitalista que, de innumerables formas, tratan de neutralizar su acción, sino en la incapacidad para enfrentar el inmovilismo.

Ellas son condiciones básicas para reconstruir política y socialmente el movimiento popular chileno, cuya constitución orgánica no puede darse sobre la base de los antiguos frentes políticos o de estructuras sociales radicalizadas, sino como una convergencia entre ambos segmentos, una cuestión sumamente complicada que no tiene precedentes. A pesar de la existencia de muchos planeamientos acerca de la

necesidad de levantar un movimiento político social, hasta el momento no se ha desarrollado una práctica que establezca su viabilidad, ya que solo ha quedado como una idea general. Sin embargo, apuntar a resolver tal deficiencia es altamente necesario, lo que dependerá del desarrollo de una praxis en la que coincidan lucha social y política junto a la elaboración teórica, algo que más allá de sus complicaciones no es inalcanzable, porque la trayectoria del pueblo chileno muestra suficiente capacidad para superar momentos complejos. El alto nivel de conciencia que ha mantenido por más de un siglo le permitirá generar una intensa producción de ideas, así como suficiente capacidad para construir sus instrumentos y plantear su propio proyecto de sociedad. La historia así lo confirma.

Finalmente queremos señalar que entregamos el presente documento político esperando que sea un aporte al necesario diálogo entre las y los militantes del movimiento popular chileno, texto que es uno más de los varios que están circulando por el país, los que nunca son definitivos ni cerrados, sino simples estimuladores de la gran tarea por recuperar las viejas ideas aún vigentes y producir otras nuevas que surgen de la praxis diaria, las que servirán para elaborar el proyecto de sociedad acorde con los intereses de los pueblos. Reiteramos el planteamiento sostenido en las primeras páginas, consistente en generar un Iniciativa por el Proyecto, pensado como un amplio y participativo proceso de discusión para intercambiar posiciones políticas e ideológicas, que tenga como resultado la producción de la propuesta de sociedad alternativa al capitalismo neoliberal, entendiendo que esta nunca estará acabada, sino en constante evolución, condicionada por la dimensión objetiva y subjetiva que adquiera la lucha de clases.

Santiago, Chile, agosto de 2024.